

HILDEBRANDT

en sus trece



¡Está más embarrada que nunca!

► La Fiscalía de la Nación presentará una tercera denuncia constitucional contra Dina Boluarte, esta vez como autora de los delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. El testimonio de un colaborador eficaz ha sido devastador

(2, 3 y 4)

Hampones brindan por el Congreso

(7 y 8)

Fuerza Popular: lavando pasivos

(9, 10 y 11)

MATICES El fujimorismo sigue vivo

oet

(16)

Los capos toman los penales

(26 y 27)

INCENDIOS: pruebas de una estupidez

(28 y 29)

Embarrada

FOTO PRESIDENCIA

► La Fiscalía de la Nación presentará una tercera denuncia constitucional contra Dina Boluarte, esta vez como autora de los delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. El testimonio de un colaborador eficaz ha sido devastador

AMÉRICO ZAMBRANO

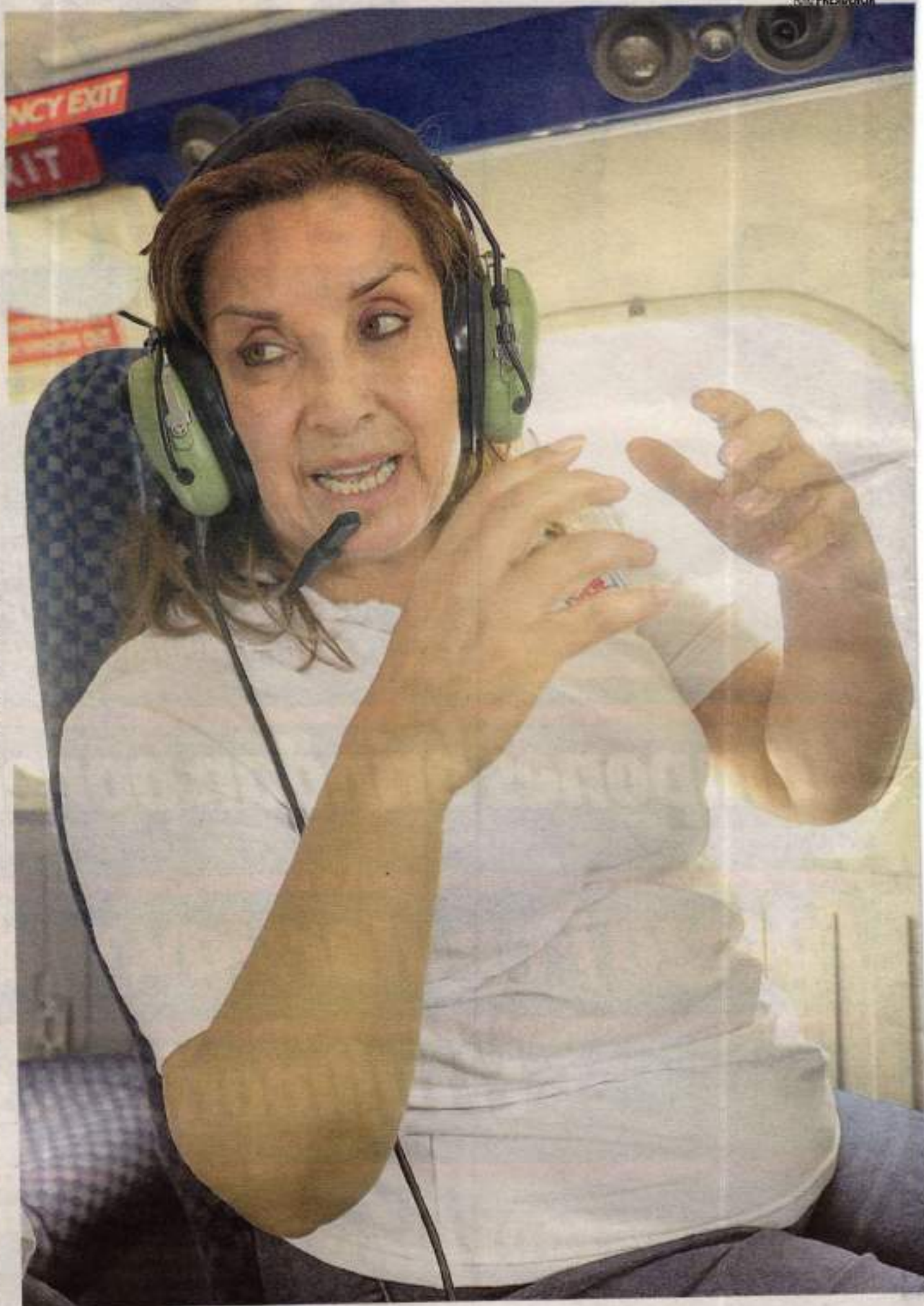
La Fiscalía de la Nación presentará una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, esta vez como autora del delito de obstrucción a la justicia y como instigadora del delito de encubrimiento personal, según información recogida por este semanario en el Ministerio Público.

Se tratará de la tercera denuncia constitucional que el despacho del Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, interpone contra Boluarte.

El 27 de mayo pasado la Fiscalía denunció constitucionalmente a la mandataria por ser presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, por el caso conocido como "Rolex-gate", vinculado a varios relojes de lujo y joyas que la presidenta obtuvo sin haberlos declarado.

Dos meses después, el 30 de julio pasado, el titular del Ministerio Público presentó una segunda denuncia constitucional contra Boluarte y seis exministros por delitos de homicidio calificado y lesiones

Dina Boluarte: la Fiscalía sostiene que está abusando de su poder para sabotear la investigación que los compromete a ella y a su hermano.





Ministro del Interior Juan José Santiváñez: será interpelado por el Congreso, a pesar de la resistencia de Fuerza Popular.

graves, entre otros cargos, que se produjeron durante las protestas en su contra de fines de 2022 e inicios de 2023.

La primera denuncia permanece estancada en la Comisión Permanente del Congreso, mientras que la segunda ni siquiera ha sido calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la acuñaista Lady Camones, cuyo partido, Alianza para el Progreso (APP), es hoy un aliado importante del gobierno.

El 10 de mayo pasado el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior Walter Ortiz por la desactivación del Equipo Especial de la Policía, que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficop), dirigido por la fiscal Marita Barreto.

El plazo de esta investigación preliminar venció el 10 de julio pasado, pero fue ampliado debido a la cantidad de nuevos

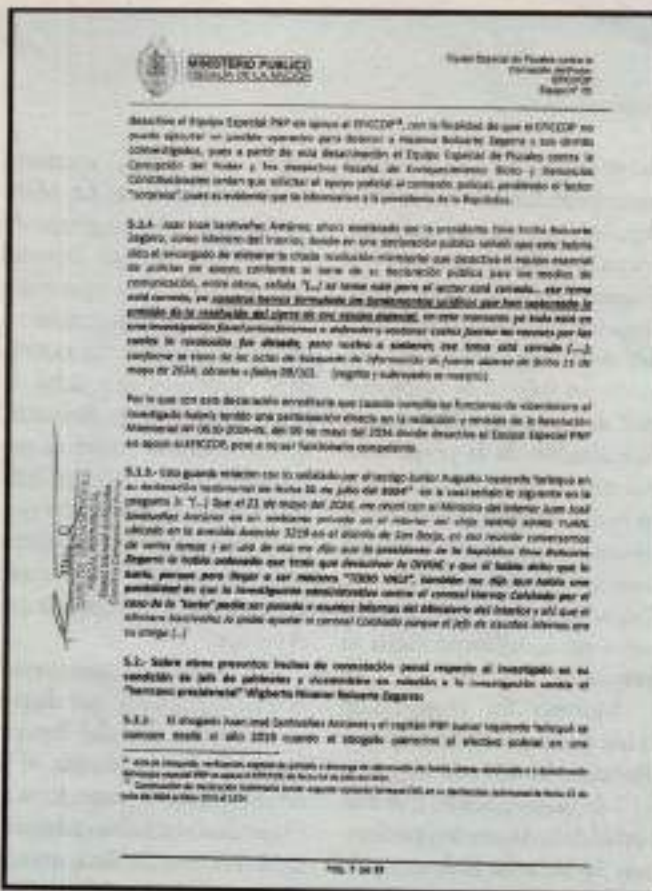
hechos que comprometen a la presidenta de la República en una serie de acciones orientadas a obstaculizar las indagaciones fiscales que la involucran a ella y a su hermano, Nicanor Boluarte, en delitos de corrupción.

Los hallazgos realizados hasta hoy por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía constituyen "indicios razonables" para que se presente una denuncia constitucional contra la jefa de Estado por obstrucción a la justicia y encubrimiento personal, adelantaron fuentes del Ministerio Público a este semanario. De no tomar esta decisión, se corre el riesgo de que el caso se paralice.

El 25 de julio pasado el Ejecutivo acudió al auxilio del Tribunal Constitucional (TC) para frenar las tres investigaciones que enfrenta la presidenta por las muertes ocurridas durante las protestas, el caso "Rolexgate" y la desactivación del Equipo Especial de la Policía.



Dos de las 39 páginas de la disposición fiscal que ordena ampliar la investigación contra el ministro del Interior por tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento.



La demanda competencial, elaborada por el procurador Luis Huerta, señala que la Fiscalía y el Poder Judicial vulneraron el artículo 117 de la Constitución que establece que un presidente en ejercicio solo puede ser juzgado por cuatro causales específicas, entre ellas traición a la patria o disolver el Congreso de la República de manera irregular.

En esta demanda, el gobierno recuerda que el TC no ha

validado la reciente interpretación del Ministerio Público y del Poder Judicial sobre el artículo 117, que permitió investigar a Pedro Castillo y a su sucesora, Dina Boluarte. Y, a su vez, le pide que se pronuncie de manera definitiva sobre los alcances de la inmunidad presidencial.

Al cierre de esta edición, el TC ya inició la evaluación de este y otros dos recursos del Ejecutivo para que se anulen

las investigaciones y se dejen sin efecto los allanamientos realizados por la Fiscalía de la Nación y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) a la casa de la presidenta y a Palacio de Gobierno en marzo pasado.

El temor fundado de la Fiscalía de la Nación es que el TC, controlado por el fujimorismo y sus aliados de la derecha, le dé la razón al gobierno y paralice todas las investigaciones contra la presidenta.

Para la Fiscalía se trata de una carrera contra el tiempo. El objetivo ahora es evitar que uno de los casos más sólidos, el de la obstrucción a la justicia, se desmorone por una decisión del TC ultraconservador.

La tesis del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales es que Boluarte, haciendo un uso abusivo del alto cargo que ostenta, está a la cabeza de una ofensiva que busca, a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sabotear las investigaciones y perseguir a los policías que colaboran con el Eficop.

El Equipo Especial de la Policía, liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, fue desactivado el 10 de mayo pasado, menos de dos semanas después del allanamiento al domicilio de la jefa de Estado.

En ese momento, el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena manifestó sobre este hecho que "lo que buscan es frustrar las investigaciones que realiza el Ministerio Público". "No se puede permitir -dijo- el entorpecimiento en la ejecución de las resoluciones judiciales".

Las sospechas iniciales, sin embargo, se fortalecieron con un informe que el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder elevó al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.

En este documento se consigna la declaración de un testigo protegido que asegura que la desarticulación del Equipo Especial de la Policía surgió como parte de un plan concertado entre la presidenta Dina Boluarte y el investigado ministro del Interior Juan José Santiváñez.

El testigo contó que Santiváñez se reunió con la presidenta días después de que este fuera designado viceministro de Orden Interno, el 17 de abril de este año. Para entonces, el coronel Harvey Colchado ya había sido suspendido temporal-



mente de sus funciones como coordinador de la Diviac y jefe del Equipo Especial de la PNP.

En dicho encuentro Santiváñez le hizo saber a la mandataria que había recibido información del área de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) que indicaba que, a pesar de la separación de Colchado, el Equipo Especial continuaba investigando a Nicanor Boluarte, de acuerdo con el testigo protegido.

Santiváñez, entonces, le recomendó a la presidenta desactivar el Equipo Especial de la Policía porque, según le dijo, ellos "eran los que impulsaban los actos de investigación contra Nicanor". Y, además, porque el nuevo coordinador del equipo, el coronel Franco Moreno Panta, quien reemplazó a Colchado en el cargo, "no era confiable".

"Es por esta razón que Santiváñez Antúñez dirigió la estrategia técnica y, por intermedio del Comandante General de la PNP, se formularon documentos administrativos y jurídicos que dejaron sin efecto la resolución de creación del Equipo Especial PNP en apoyo al Eficop", narró el testigo y añadió: "La presidenta de la República, por

Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena: su despacho alista la tercera denuncia constitucional contra la presidenta.

la información que le había entregado Juan José Santiváñez Antúñez, decide convocar a una reunión al coronel PNP Franco Moreno Panta, coordinador del Equipo Especial y jefe de la Diviac. Dicha reunión se dio en Palacio de Gobierno el 7 de mayo de 2024, donde la intención de la presidenta era que el coronel le informe si es que estaban próximos a ejecutar un operativo contra su hermano Nicanor Boluarte Zagarra. Pero el coronel Moreno no le informó nada al respecto".

Moreno ha confirmado a los fiscales del Eficop que Boluarte lo citó con urgencia el 7 de mayo pasado, dos días antes de la detención preliminar de Nicanor Boluarte y de su abogado Mateo Castañeda. Según Moreno, la presidenta quería corroborar si existía una orden de detención activa contra su hermano. También le hizo preguntas sobre el presupuesto asignado a la Diviac para las labores de inteligencia. Moreno ha narrado que tuvo que decirle a Boluarte que no podía compartir información reservada sobre los gastos de inteligencia de la Diviac, a lo que Boluarte respondió: "Es la plata del pueblo, coronel".

Ese mismo 7 de mayo,

según el testigo, efectivos de la comisaría de La Molina detuvieron a un grupo de agentes del Equipo Especial que realizaba una operación de vigilancia y seguimiento a Nicanor Boluarte. La noticia llegó rápidamente a oídos de la presidenta Dina Boluarte, quien ordenó al entonces ministro del Interior Walter Ortiz que elabore la resolución que desactivaba al grupo de policías que se disponía a capturar a su hermanísimo, de acuerdo con el testigo.

La resolución ministerial N° 0610-2024-IN, que dispuso la destrucción del Equipo Especial, fue publicada el 9 de mayo pasado, cuando ya el Poder Judicial había ordenado las detenciones preliminares de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y de otros investigados. El megaoperativo incluyó el allanamiento judicial de 22 inmuebles.

De todos modos, fue un golpe para la investigación del caso "Los Waykis en la Sombra". Porque, a partir de la desactivación del Equipo Especial de la Policía, el Eficop y los despachos fiscales de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales se vieron forzados a solicitar apoyo policial al Comando de

la PNP, "perdiendo con ello el factor sorpresa, pues es evidente que (los generales del alto mando) le informarían a la presidenta", afirmó el testigo protegido.

La desactivación del Equipo Especial fue la segunda fase de un plan obstruccionista que empezó con la suspensión del coronel Harvey Colchado, según las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. El siguiente paso de la ofensiva supone la desarticulación de la Diviac.

El 22 de julio pasado el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como "Culebra", declaró al Eficop que el 21 de mayo de este año se reunió con Santiváñez en un ambiente privado del chifa Wang Xiang Yuan, en San Borja. En este lugar, según un audio que "Culebra" entregó a la Fiscalía, el ministro del Interior le dijo que la presidenta Dina Boluarte le ordenó desactivar la Diviac y que él le había dicho que lo haría porque para llegar a ser ministro "todo vale".

Por estos hechos el Ministerio Público amplió la investigación preliminar contra Santiváñez por delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias en agravio del Estado.

A las declaraciones del tes-

tigo protegido y de "Culebra" se suman los testimonios del exministro del Interior Carlos Morán y de los coroneles PNP Harvey Colchado y Franco Moreno, quienes confirmaron que la presidenta de la República, a través de su exabogado Mateo Castañeda, intentó obstaculizar las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte mediante presiones y ofrecimientos indebidos.

La investigación preliminar del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales indica que la presidenta Dina Boluarte actúa, en los hechos, como la cabecilla de una organización criminal enquistada en lo más alto de la estructura del Estado que busca interferir en la justicia y boicotear las investigaciones de la Fiscalía.

Bajo esta tesis fiscal, Boluarte está dispuesta a todo con tal de evitar que la investiguen, mientras la Policía Nacional y el Ministerio del Interior operan como su "brazo de obstrucción" en esta tarea.

De tal manera que la tercera denuncia constitucional contra Boluarte es inminente. Que las bandas que han tomado el Congreso la encarpeten, es otra cosa. La justicia a veces tarda pero siempre llega. ■

El fiscal Carlos Ordaya López fue excepcionalmente benévolo con Fujimori y archivó de modo definitivo el caso de Luis Galindo (documento de la derecha).



FOTO: CESAR ZAMALLOA

vió en las dependencias. Un día de octubre de 1994 el entonces jefe de la Policía Antiterrorista en Huánuco, Agustín Quezada, se presentó en la casa de Luis Galindo, entonces vocal de la Corte Superior de la región, y le comunicó que el jefe político militar, coronel Eduardo Negrón, quería conversar con él. Galindo aceptó "la invitación".

Una vez en la base militar de Yanaq, la velada empezó a tomar otro cariz cuando lo encerraron, solo, en una habitación. En ese momento Galindo desconocía que unas horas antes el propio Fujimori, a través de Frecuencia Latina, había anunciado su detención por tener filiación terrorista y que estaba confesando.

"Me ha dejado sorprendido cómo personas que uno jamás se imaginaba que podrían estar involucrados en Sendero se acojan a la ley de arrepentimiento. Nada más que el rector de la Universidad Hermilio Valdizán y un vocal de la Corte Superior de Huánuco se han acogido a la ley y que no me digan que fue por presión. Fueron cogidos ante el fiscal civil, les han hecho su manifestación y han solicitado acogerse", declaró Fujimori a los micros de Frecuencia Latina. El rector al que se refería

Fiscal wayki

► El fiscal que tiene como misión investigar a los hermanos Boluarte en una trama de favores y contraprestaciones es el mismo que exculpó a Alberto Fujimori en un caso de detención ilegal y tortura

RICARDO VELAZCO

El fantasma de Fujimori merodea a Carlos Ordaya López, el fiscal a cargo del expediente "Waykis en la Sombra", que involucra a los hermanos Boluarte en una red de favores y contraprestaciones. El fiscal Ordaya es el mismo que en 2018 libró a Alberto Fujimori de una acusación por la detención ilegal y tortura del juez Luis Galindo Cárdenas. El fiscal esgrime que fue incapaz de obtener pruebas suficientes para formalizar la acusación.

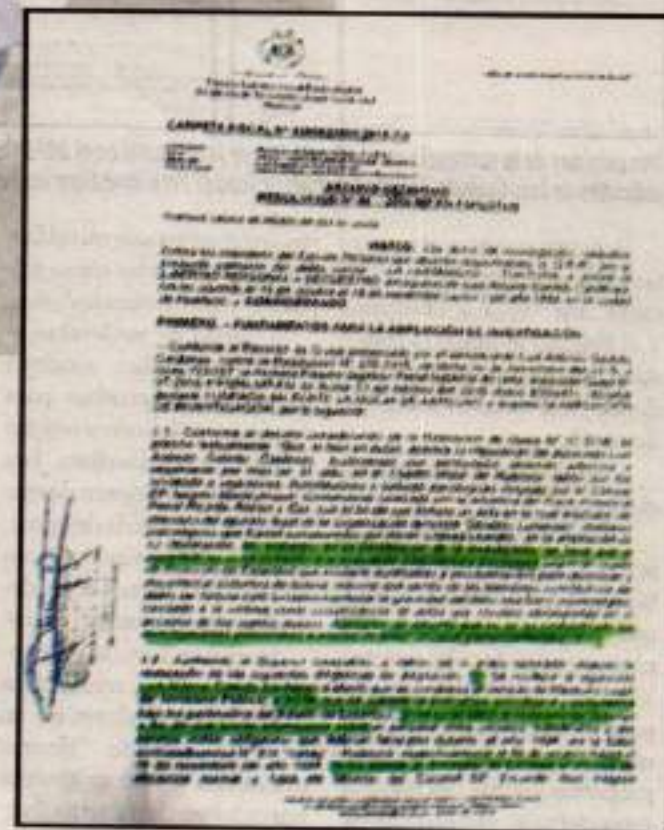
"Sabía contra quién estaba chocando y necesitaba una concurrencia de indicios para

formular acusación, pero las pruebas no fueron suficientes", dice Ordaya consultado para este reportaje.

Es Luis Galindo, el exmagistrado detenido ilegalmente, quien narra la pesadilla que vi-

era Abner Chávez. El vocal era, claro, Luis Galindo.

"Me pareció raro que Fujimori me acusara porque yo no había tenido problemas personales o políticos con él", señala Galindo.





Jhon Raymundo Huamán, presunto cabecilla de "Los espectros de Ancón", detenido el pasado 2 de septiembre en Ventanilla. La Fiscalía tuvo que esperar seis horas para poder allanar su vivienda.

iQué crimen!

► El hampa está de fiesta con la ley que evacuó el Congreso para sabotear el procedimiento para allanar casas y locales comprometidos en investigaciones del Ministerio Público

ALONSO ZAMBRANO

Los malandros de toda laya ya pueden rendirle tributo al Congreso afín. La flamante ley que impide ejecutar allanamientos sin la presencia del abogado de los sospechosos ha empezado a dar

frutos. En tres recientes megaoperativos los fiscales y policías tuvieron que esperar hasta cinco horas la llegada de los picapleitos antes de comenzar a revisar los inmuebles, tiempo más que suficiente para poner a buen recaudo cualquier prueba incriminatoria.

"Los mismos policías nos

están diciendo en el campo: ¿para qué movilizamos centenares de agentes si vamos a entrar a las casas y quedarnos cruzados de brazos? (...) Como no podemos inmovilizar a los familiares de los detenidos, estos se deshacen de evidencia mientras nosotros tenemos que esperar a los abogados", dice el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías de Crimen Organizado.

Chávez Cotrina, con años de experiencia en la lucha contra bandas criminales, agrega: "Los allanamientos tienen por naturaleza el factor sorpresa. Uno allana para registrar y encontrar evidencias inmediatamente, no para sentarse al lado del investigado a esperar durante horas que venga su abogado (...). La espera es de 2 a 5 horas en promedio".

FRUSTRACIÓN EN LA CANCHA

El último domingo 15 la

Fiscalía contra el Crimen Organizado de Ayacucho y el Frente Policial VRAEM realizaron un operativo conjunto en Lima, Pasco y Junín. El objetivo era allanar inmuebles vinculados a la banda "Los Ojos Lindos" y, eventualmente, detener a su cabecilla, Timoteo Espinoza Dolores (46), alias "Flaco".

La banda se dedica al abastecimiento de insumos químicos a narcotraficantes del VRAEM.

Durante la investigación, que duró nueve meses, la Policía recabó pruebas para acusar a Espinoza de dirigir, presuntamente, el traslado de cientos de bidones de ácido sulfúrico y acetona de Lima a Pangoa (Junín).

Fueron necesarias varias semanas de seguimiento a los vehículos donde se camuflaban los insumos, a veces entre abarrotes y otras entre material de limpieza. Con la venia del Poder Judicial, la Policía interceptó las llamadas telefónicas de Espinoza y descubrió que

los bidones se guardaban en talleres de reparación de autos. Estos locales estaban ubicados estratégicamente en varios de los centros poblados que están a lo largo de la ruta entre Pasco y Junín.

El domingo 15 de septiembre, tras obtener el visto bueno del Poder Judicial, la Fiscalía realizó un operativo que se saldó con la detención de Espinoza y seis de sus subordinados. El problema es que antes de que pudieran allanar los talleres donde se guardaban los insumos químicos todo quedó paralizado porque los detenidos dijeron no tener abogados y fue imposible conseguir defensores públicos.

"Cuando solicitamos abogados a la Defensoría Pública, nos dijeron que solo trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en días de semana (...) Los fiscales han tenido que quedarse de madrugada hasta el día siguiente para poder hacer las requisas",

dice el fiscal Chávez Cotrina.

Tras horas de espera, los fiscales lograron incautar 50 toneladas de ácido sulfúrico y 28 toneladas de acetona. Sin embargo, no pudieron allanar todos los inmuebles comprendidos en la medida judicial porque no fue posible conseguir suficientes abogados de oficio.

Un hecho similar ocurrió el pasado 2 de septiembre en Ventanilla.

La Fiscalía de Crimen Organizado de Lima Noroeste realizó un operativo en el asentamiento humano "Nueva América". El objetivo era desbaratar a "Los espectros de Ancón". La banda se dedica a instalar antenas y proveer de señal de internet a los presos de los penales Ancón I y II.

La banda estaba encabezada por Jhon Raymundo Huamán, alias "Johnny". Según las investigaciones del Ministerio Público, captaba a vecinos del asentamiento "Nueva América", a quienes pagaba cuotas mensuales para que instalaran las antenas en las azoteas de sus viviendas.

"Los espectros de Ancón" empleaban una frecuencia de señal que evadía los bloqueadores de las cárceles. Para proteger las instalaciones tenían a una red de matones que amenazaban a cualquier vecino que se acercara a los receptores.

El lunes 2 de septiembre, a las 2 de la mañana, agentes de la Diviac y la Fiscalía detuvieron a Jhon Raymundo, junto a tres de sus lugartenientes, en el asentamiento "Nueva América". Los agentes tuvieron que esperar seis horas para allanar la vivienda porque Raymundo alegó que no tenía abogado y que requería uno de oficio. Pero en la Defensoría Pública no empiezan a trabajar hasta las 8 de la mañana.

"Primero debemos esperar a los abogados de libre elección de los detenidos. Si no llegan, debemos llamar a un abogado de oficio. Pero si este tampoco llega, entonces se cancela toda la diligencia (...) Esta ley de todas maneras nos ha perjudicado, ha retrasado el tiempo de los allanamientos", dice un coronel de la Dirinci que pide mantener



FOTO JOEL DURÁN

"El gobierno y el Congreso están en una competencia para ver quién da más normas a favor del crimen organizado", dice Jorge Chávez Cotrina.



FOTO JOEL DURÁN



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN

Américo Ganza y Waldemar Cerrón, congresistas de Perú Libre: fueron los principales impulsores de la ley que favorece a los delincuentes. Es una ley de autodefensa.

su nombre en reserva.

El pasado 15 de agosto la Policía realizó un operativo para detener a los integrantes de "Los Zeta de Sayán".

Esta peligrosa organización criminal, que opera desde el 2021 en Huaura y Huacho, se dedica a la extorsión y al sicariato. La banda estaba

liderada por Zorovabel Del Castillo Santiago, alias "Zorro". El delincuente, según la declaración de diversos testigos, ha sembrado el te-

rror al norte de Lima a punta de asesinatos.

"Operan bajo la fachada

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Lavado *de pasivos*

► El fujimorismo sin patriarca prepara una operación de reescritura de la historia mientras que se acentúan dos tendencias y el nombre de Kenji vuelve prometedoramente al escenario

FOTO CÉSAR ZAMALLOA



Kenji y Keiko: ella teme por el carisma sentimental del hermano renegado.

ELOY MARCHÁN

Alberto Fujimori —dice una fuente de su entorno— dejó 8 videos y 3 libros que verán la luz en los próximos meses. Con este material el fujimorismo más audaz piensa que podrá hacer lavado al seco a la imagen de su líder. En esa historia *ad hoc* de la década

de los 90 no hubo autogolpe, jamás se cometieron crímenes de lesa humanidad y nadie de apellido Fujimori se llevó un sol mal habido del Estado.

Uno de los libros se titula "El inconforme". Es el segundo volumen de las memorias del dictador. Los otros dos son textos ilustrados que relatan a su antojo "hitos" del fujimorato.

En los videos, grabados

por Carlos Raffo, el patriarca del fujimorismo da una versión de parte de los 10 años en los que fue inquilino de Palacio y, eventualmente, responde a alguna crítica, sin derecho a repregunta.

La estrategia es electoral. Se trata de mantener vigente el deceso del padre para apuntalar la candidatura de la hija con miras al 2026. Porque lo cierto es que en las entrañas del fujimo-

rismo temen que el 11 de septiembre Keiko Fujimori haya empezado el descenso sin retorno. Algunas sombras han empezado a merodearla.

Pese a que los medios afines se esfuerzan por vender una imagen de unidad, las viejas discrepancias se han profundizado. El sector albertista, que recobró fuerza en las últimas elecciones y mantenía línea directa con Alberto Fujimori, está pro-

moviendo un "regreso radical" a los orígenes. Mientras que el keikismo considera que la apuesta es demasiado arriesgada.

En el bando albertista están Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Martha Chávez y Carlo Raffo. Los keikistas son Miguel Ángel Torres, Luis Galarreta, Úrsula Letona y Patricia Juárez. Cada grupo maneja un chat de Telegram de coordinación ►

► e intercambio de información.

El factor Kenji también será decisivo.

Más allá del consuelo mutuo a la hora de despedir a su padre, lo cierto es que Keiko y Kenji todavía no pueden sentarse a hablar de política. Cada vez que la "señora K" intenta tocar el tema, Kenji escapa de la conversación.

La hermana mayor quiere, fervientemente, hacer "las paces" con el benjamín de la familia. El amor fraternal tiene fecha en el calendario.

Kenji —gracias a su hermanísima— está purgando pena por el asunto de los "mamánideos". Tiene una sentencia de prisión suspendida de 4 años más los 18 meses de inhabilitación para cargo público. La inhabilitación ya terminó y la condena vence en el 2026.

Durante el entierro de Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa hubo partidarios del dictador que gritaron "Kenji presidente". No se escuchó ninguna arenga por la candidatura de Keiko.

"Keiko tiene miedo de que Kenji sea jalado por otro partido y divida al fujimorismo", dice un informante naranja que añade: "Es un hecho que Kenji despierta más simpatías que su hermana. Hoy, más de la mitad del fujimorismo cree que él es el heredero, y ya no Keiko".

Las rabietas de la "señora K" son hartas conocidas. La última la padeció en carne propia Elio Riera, el abogado que sacó a su padre de prisión. Riera cometió el error de publicar un tuit comunicando la muerte de su cliente antes del anuncio oficial. Fue la coartada perfecta para deshacerse de él.

La jefa de Fuerza Popular siempre sospechó que Riera quería hacer una carrera política y profesional usando a Fujimori.

"¡Qué casualidad que cuando Alberto Fujimori salía con Riera a hacer un trámite siempre había una cámara de RPP, Willax o Canal N esperándolo afuera! Era Riera quien pasaba el dato y quien le decía a Fujimori que Keiko no debía ser otra vez candidata", dice un experimentado fujimorista.

"El figurismo de Riera casi lo echó a perder todo. ¡Cómo se le ocurre llevarlo

a pasear al Jockey Club en pleno debate sobre la validez del indulto! La gente empezó a pensar que Fujimori estaba bien de salud y que todo era una farsa", añade otra fuente del partido.

Keiko también despidió a Augusto Paredes, el fiel asistente del dictador. A la

jefa de Fuerza Popular no le gustaba que llevara alcaldes y empresarios a hablar con su padre a la casa de San Borja.

Y en el horizonte, el fujimorismo ha detectado otro adversario temible por su capacidad de arrastrar a la derecha más ultra. Se trata de Phillip Butters.

Las malas lenguas han hecho correr el rumor de que Butters anda buscando una reunión con Kenji y está intentando jalar a personajes como María Luisa Cuculiza a las filas de Avanza País, su flamante partido.

"El fujimorismo debe volver a ser popular, como

lo fue con Alberto Fujimori. Keiko no entendió eso, se dejó llevar por Pier Figari y Ana Vega, y perdió tres veces en segunda vuelta. Butters sí es un peligro porque tiene el carisma que Keiko no tiene", dice un albertista.

Los especialistas consultados para este informe



Carlos Raffo, el viejo propagandista del sátrapa, armó y controló el espectáculo funerario que requirió de mucha logística y movilización (abajo).





FOTO CESAR ZAMALLOA

Simpatizantes fujimoristas: en el cementerio y ante el féretro del dictador gritaron "Kenji presidente".



Julio Carrión: "El efecto de simpatía por la muerte de Fujimori se va a erosionar y no le va a llegar a Keiko para el 2026".



Maxwell Cameron: "Fujimori tenía alergia a todo lo que era fiscalización. Nunca pensó en tener que rendir cuentas a los peruanos".

consideran que la cuarta candidatura a la presidencia no terminará mejor que las anteriores.

"El efecto de simpatía por la muerte de Fujimori se va a erosionar a través del tiempo y no le va a llegar a Keiko para el 2026. El fujimorismo es, en cierta medida, como el odriismo, que tuvo su momento más alto en las elecciones del 62 y después empezó a caer. Tal vez Keiko no llegue a tener incluso la votación del 2021", dice Julio Carrión, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Delaware (EE.UU.) y autor del libro "El legado de Fujimori, el

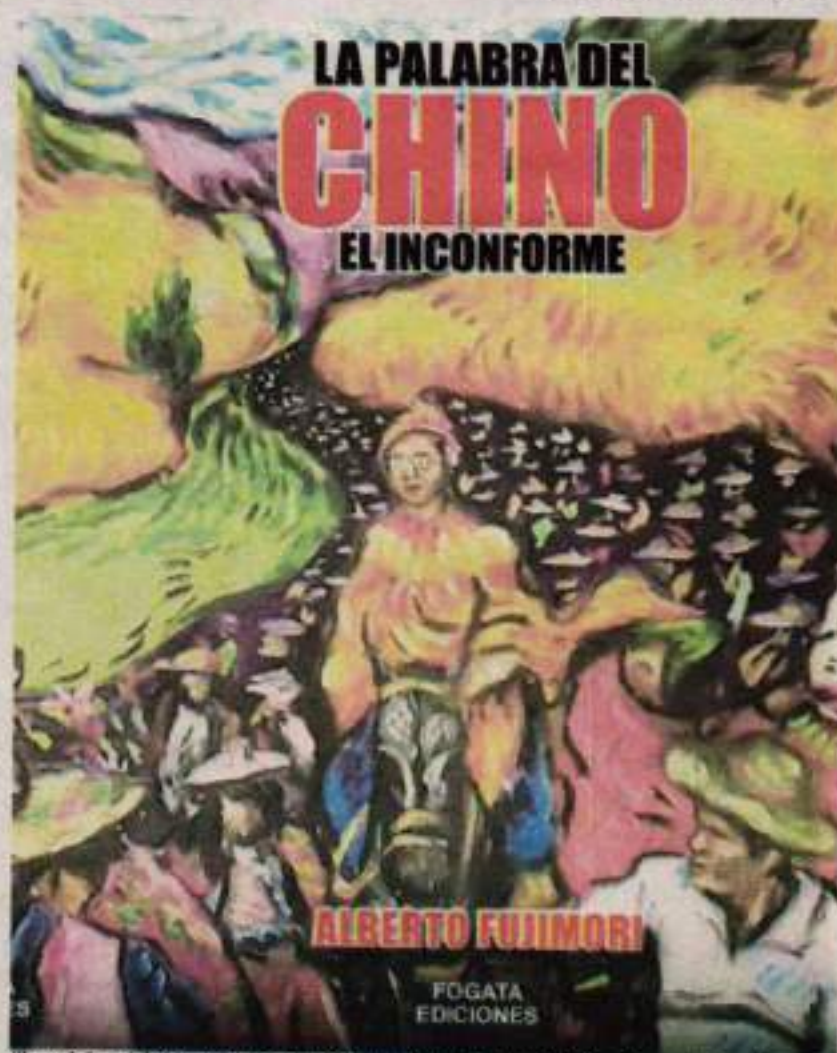
auge del autoritarismo electoral en el Perú".

Coincide con ese punto de vista Maxwell Cameron, profesor de la Universidad British Columbia (Canadá) y autor de los libros "Democracia y autoritarismo en el Perú" y "El laberinto peruano".

"¿Quién es el Alberto Fujimori de hoy en día? No es Keiko, es Bukele. Él representa al líder bonapartista que aprovecha un momento de crisis para tener una popularidad alta y permanecer en el poder. Cuando hablé para los libros con dirigentes en el Perú, decían que 'Fujimori

fue exitoso y dio resultados'. ¿Qué resultados ha dado Keiko? Solo un trabajo permanente de obstruir y traerse abajo a gobiernos", señala Cameron.

¿Cuál es el legado de Fujimori que quedará en la historia? Carrión dice: "Desde la perspectiva del desarrollo democrático, el legado de Fujimori es negativo. Algunos de sus logros innegables, como la lucha contra la hiperinflación y la violencia de Sendero Luminoso, fueron planteados como que fueron posibles gracias al autogolpe. Eso es muy peligroso porque vende la idea de que para 'salvar la



"La palabra del chino. El inconforme": nuevo libro de Alberto Fujimori que está en imprenta. Es otro intento por reescribir la historia.

democracia hay que acabar con ella".

El profesor de la Universidad de Delaware señala que "(...) todos los logros que Fujimori alcanzó pudieron hacerse dentro de la democracia".

Sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Fujimori, Carrión afir-

ma: "El legado de Fujimori está manchado de sangre. El problema es que mucha gente argumenta, de manera incorrecta, que eso era necesario para acabar con la amenaza terrorista. Eso es una falacia. No se puede defender el récord de un gobierno apelando a la muerte de inocentes".

"El autogolpe de Fujimori creó una Constitución autoritaria y neoliberal que hasta hoy el Perú no ha logrado superar. La situación actual del Perú, con una democracia muy debilitada, sin partidos políticos, muy corrompida, sin mecanismos de fiscalización, es el legado de Fujimori, de su autogolpe y su forma de gobernar en los 90", dice Cameron.

El profesor de la Universidad de British Columbia recuerda que "Fujimori faltó el respeto al imperio de la ley

y a la separación de poderes. Buscó controlar todas las instituciones, cortes judiciales y autoridades electorales. Fujimori tenía alergia a todo lo que era fiscalización de su comportamiento. Nunca pensó en términos de tener que rendir cuentas a los peruanos ni a las instituciones". Y su hija tampoco. ■

La llamada de la tribu

Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea. Ayúdanos a continuar.



Plutón Editores S.A.C.



Donar aquí con Tagit

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Prensa a la medida



DANIEL ESPINOSA

han catalogado como uno de los gobernantes más corruptos de la historia reciente. La impresión dejada fue la de un país inmoral, capaz de celebrar sin asco a un gobernante que secuestró, torturó y desapareció a peruanos, lo que equivale a decir que sus vidas y las de sus deudos no valen un carajo (si esta representación del Perú fuera cierta, la hija hubiera ganado en primera vuelta).

Para simular un poco de balance, se habló de un personaje "controvertido", o de "luces y sombras". Peor aún, cuando se debieron mencionar crímenes juzgados y con sentencia firme, se habló, en su lugar, de "acusaciones". Luego se ensayaron las justificaciones de siempre: "es que estábamos en guerra" y "no había alternativa".

Al final, el sesgo se volvió tan flagrante -tan desatada la necrofilia- que no faltaron arengas del tipo "Fujimori salvó al Perú". Esta es la narrativa que, en las últimas décadas, la gran prensa ha conseguido instalar en las mentes más impresionables y menos reflexivas. Aquí

"RPP", la señal del conservadurismo amable y el *statu quo* neoliberal, merece todas las menciones especiales.

Es precisamente evitando pronunciar el término "neoliberalismo" que la gran prensa recubre los limitados logros económicos del fujimorismo de una mística de la que carecen. Ni Alberto Fujimori ni sus ministros descubrieron la pólvora en ese ámbito, sino que solamente inauguraron de manera local el sistema político y económico que se ve-

nía imponiendo sobre la región desde Pinochet. El régimen Fujimori -asesorado por ese agente de la CIA que hoy reside en un penal del Callao- no habría durado dos años sin el apoyo del poder hegemónico, promotor del Consenso de Washington y amo y señor del Fondo Monetario Internacional.

¿Para quién "salvó el Perú" Fujimori? Los grandes beneficiarios de este orden son precisamente los grandes anunciantes de la prensa corporativa, que publicitan productos y servicios tanto como ideología. Por eso no dejamos de escuchar jamás el coro de elogios, incluso cuando el neoliberalismo ya ha sido completamente desprestigiado.

En 2024, nuestro país sigue siendo uno dolorosamente precario en el que más del 40% de la niñez sufre de anemia. Nuestra educación es la peor del mundo. Claro, la masificación de la falsa narrativa fujimorista no sería posible con un sistema educativo digno de ese nombre. ■

La gran prensa es fujimorista, siempre lo fue. Es fujimorista porque sus dueños y sus anunciantes son fujimoristas. El descaro con el que se manifiesta este sesgo se acrecienta o disminuye de acuerdo al clima político, tornándose francamente escandaloso en elecciones. La semana pasada, la muerte de Alberto Fujimori fue tomada como una suerte de licencia, y los pesos pesados del periodismo nacional se sacaron la careta democrática para rendirle tributo al dictador de manera abierta e irrestricta.

El resultado fue un espectáculo que queda para la historia, un colofón a la medida del autoritarismo que corrompió todas las instituciones democráticas del país durante la década del noventa y que aún nos sigue jodiendo. Lo de la semana pasada fue un homenaje bruto y achorado, un tributo a la antide-mocracia.

Fujimori Kenya -nombre con el que el exdictador se presentó en Japón luego de darse a la fuga- se pasó una década y media "agonizando", y apenas murió, el circo levantó su telón sin demora. Los dos encargados de dirigir el espectáculo fueron el Gobierno y la prensa corporativa; el primero decretó tres días de luto nacional y toda clase de honores, la segunda convirtió todo lo anterior en una oportunidad para reforzar varios mensajes convenientes.

Así, con sorprendente torpeza histórica, la gran prensa hizo suyo el descrédito del Gobierno de Boluarte y abrazó el legado de un sátrapa.

¿Cómo se explica tremendo descaro? ¿Por qué el periodismo -servidor esencial e indispensable del orden democrático- asumió el rol de plañidera de un dictador que malversó millones precisamente para corromperlo y secuestrarlo? La respuesta ya la adelantamos en el primer párrafo de este texto y no podría ser más sencilla: los más importantes anunciantes de los medios de comunicación masiva también financian al fujimorismo. Prensa y partido trabajan para los mismos años.

Veamos. En años recientes, varios fiscales decentes y el periodismo independiente sacaron a la luz los aportes económicos que varios actores privados habían hecho en beneficio de

Keiko Fujimori y sus fallidas campañas electorales. Entre los interesados en poner en Palacio a la primera dama de la dictadura figuraban Dionisio Romero Paoletti, del Grupo Romero, y Vito Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria. Otros actores de peso del capitalismo criollo le apostaron a Keiko a través de la CONFIEP, que también donó un par de milloncitos.

Si prestamos atención a los informes de "Ojo Público" (entre los que destaca "Los dueños de la noticia", de 2017) veremos que los magnates mencionados y las empresas asociadas a ellos -los más notorios financistas del

fujimorismo- controlan buena parte de la torta publicitaria peruana. Como señaló el medio mencionado, en lo más alto de la lista "...aparecen anunciantes nacionales del sector como Alicorp del Grupo Romero, uno de los más fuertes del país; y Gloria, involucrada en una polémica reciente por la composición de sus lácteos".

A esta mala leche hay que añadir que, en periodo electoral, los dólares también viajan directamente desde los partidos hasta los medios de prensa -en sobres y maletines, como en los infames vladivideos-, incurriendo sin hacerse mucho lío en presuntos esquemas de lavado de



RPP: recordando los tiempos cuando Manuel Delgado Parker visitaba el SIN.

activos, como cuando José Chlimper llevó 210,000 dólares de Odebrecht a "RPP" por encargo de Keiko.

Entonces, lo sorprendente hubiera sido que la prensa corporativa no se convirtiera en vocera oficiosa del fujimorismo. Mientras tanto, los necios siguen repitiendo que la publicidad privada permite que la gran prensa sea "independiente". Por suerte, ese discurso -base de la teoría democrática en su versión capitalista- envejeció muy mal.

La propaganda de los últimos días se realizó convirtiendo los medios de comunicación en un gran panel integrado por partidarios y fanáticos. Uno tras otro fueron desfilando por delante de los micrófonos y las cámaras. Como las voces críticas fueron dejadas afuera por "decoro", todo fue elogio y homenaje.

La impresión dejada fue que el Perú es un país eminentemente antidemocrático, una nación capaz de celebrar de manera rabiosa y masiva a un autócrata que varias instituciones internacionales

LA GRAN PRENSA HIZO SUYO EL DESCRÉDITO DEL GOBIERNO DE BOLUARTE Y ABRAZÓ EL LEGADO DE UN SÁTRAPA

Tres décadas, varios millones

ESCENA 1: JUNIO 1999

Dionisio Romero Seminario, presidente del Banco de Crédito y cabeza del multifacético grupo Romero, está en la salita del SIN. Conversa amigablemente con Vladimiro Montesinos sin saber que está siendo filmado. Fue a pedirle como "favorcito" a Montesinos que nombrara a su banco como el administrador de una empresa pesquera (Hayduk), lo que obtuvo y le rindió 15 millones de dólares. Se trata de un asunto que es estrictamente competencia de un juez, pero Montesinos manejaba el Poder Judicial (habían comprado a la mayoría de la Corte Suprema con grandes fajos de dólares, como otros vladivideos lo muestran). Dionisio Romero también pidió que le redujeran los impuestos a las importaciones de trigo, ya que como dueño de Alicorp trae trigo del exterior para venderlo como harina y fideos. El ingreso de trigo subsidiado en Estados Unidos socava nuestra seguridad alimentaria y empobrece a los productores peruanos que ven su producto desplazado de los mercados. Sin importar eso, días después de esa reunión salió la norma, suscrita por el gobierno de Fujimori, rebajándole esos impuestos: varios millones más de ganancias para el grupo Romero. A cambio, Montesinos le pidió a quien la "Encuesta del Poder" consideraba el empresario más poderoso del Perú que diera declaraciones a favor de la reelección de Fujimori. Cumplió. Sus declaraciones salieron publicadas en el diario "Expresso".

Esta viñeta tiene un antecedente que la explica mejor. Una semana antes Dionisio Romero había estado en esa misma salita, con Montesinos y los altos jefes de las fuerzas armadas y policía, complotando para apoyar la fraudulenta segunda reelección de Alberto Fujimori. Era evidentemente una reunión antidemocrática e ilegal y de pleno conocimiento de Alberto Fujimori. La dictadura y el poder económico en Perú jugaban en pared, intercambiando favores. Fujimori jugaba a concentrar más poder, Romero a concentrar más dinero.

Añado una pequeña transcripción del diálogo entre Romero y Montesinos, sobre el tema adicional de los fondos para la campaña de la re-reelección de Fujimori:

-Romero: ¿Fondos para la campaña?
-Montesinos: ¿Fondos? Para eso están los amigos.
(Risas).

-Romero: Tenemos que empezar a ver cómo se ha manejado, qué magnitud le pega, cómo se usa al mismo Estado para que el Estado colabore, porque sacarles a empresarios plata hoy es difícil.

ESCENA 2: JUNIO 2018

Keiko Fujimori y Martín Vizcarra tienen una reunión secreta. La reunión, en una casa de Miraflores es apadrinada por el empresario agroexportador José

Chimper, que en ese entonces era el secretario general de Fuerza Popular. Keiko pide que no se haga pública la reunión y le pide a Vizcarra que bote a la ministra de salud. La razón del pedido es que se estaba exigiendo la aplicación de los avisos en forma de octógonos para alertar sobre la comida chatarra y la principal empresa afectada sería Alicorp del grupo Romero, que tiene una posición monopolística en aceites, galletas, cremas, harinas, fideos y varios otros productos altos en azúcares y grasas. Pero ocurre que la alimentación saludable no es un tema banal: la obesidad es una epidemia mundial y en el Perú el exceso de peso ya



PEDRO FRANCKE

nista". Desde su bankada en el congreso había presentado varios proyectos para desvirtuar la ley de la alimentación saludable y los avisos de los octógonos en beneficio de Alicorp y el grupo Romero. Al no conseguir su aprobación Keiko trató de evitar que se aplicara la ley despidiendo a la ministra de salud, pero Vizcarra no le concedió el pedido porque no quiso convertirse en su sirviente (a diferencia de Dina). Pero los Fujimori tienen espíritu dictatorial: en septiembre del 2019 los congresistas leales a Keiko Fujimori votarían en bloque por vacar a Vizcarra, pero la jugada les falló y el congreso fue disuelto. Un año y tres meses repetirían la jugada con éxito y Vizcarra fue vacado con los votos de la bankada fujimorista, imponiendo a Manuel Merino como presidente (con Luis Arista como su ministro de economía).

ESCENA 3: JUNIO 2024

El congreso, con los votos fujimoristas, aprueba una ley en favor de las AFP. La llaman "reforma del sistema de pensiones" y Keiko Fujimori saca un video defendiendo y aplaudiendo la medida. Una de las cuatro AFP es de propiedad del grupo Credicorp/Romero. El año 2022 (la SBS no reporta datos del 2023) la AFP Prima nos cobró a los trabajadores comisiones por 2 mil 460 millones de soles. Como sus costos no eran la mitad de esa cifra, tuvo utilidades operativas por 1 mil 254 millones de soles, que es lo que ganan cien mil trabajadores con sueldo mínimo en todo un año. Además de tener buenas ganancias directas, como tienen secuestrado el dinero de los trabajadores, controlan un fondo de 36 mil 851 millones de soles, una buena parte de los cuales los entregan a sus propias empresas (lo que en países como Chile o Colombia está prohibido desde hace décadas).

La ley de Keiko beneficia a las AFP de varias formas: impide que haya nuevos retiros por parte de sus afiliados, aun ante emergencias, y al momento de la jubilación quienes hoy tienen menos de 40 años ya no podrán gestionar su dinero de otra forma, con lo que las AFP se aseguran tener bajo control nuestro dinero. Obligan a afiliarse a los trabajadores independientes, de tal manera que tendrán más gente pagándoles comisiones y abultando su fondo. Incluso han inventado un "aporte por consumo" que no existe en ninguna otra parte del mundo y que obliga a un subsidio estatal que pondrá más dinero bajo su control y sobre el cual las AFP cobrarán comisiones.

Los 3 millones 650 mil dólares que Dionisio Romero Paoletti le entregó a Keiko Fujimori siguen rindiendo sus frutos. El pacto corrupto entre Alberto Fujimori y Dionisio Romero Seminario no ha perdido vigencia y se ha ido renovando a lo largo de tres décadas. ■



Dionisio Romero Seminario y Vladimiro Montesinos en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional. "Soy un hombre de centroizquierda", decía el banquero en aquel entonces.

afectaba a más del 60 por ciento de la población en ese momento. Es un derecho básico del consumidor estar informado de qué productos tienen muchas grasas y azúcares. Un flashback nos ayuda a entender el interés de Keiko al extremo de pedir que saquen a una ministra. Regresamos un instante al verano del 2016 y nos encontramos con Dionisio Romero Paoletti, hijo de Dionisio Romero Seminario, en reuniones secretas con Keiko Fujimori. Le entrega diecisiete maletines estilo James Bond conteniendo un total de 3 millones 650 mil dólares, billete sobre billete, retirados de la bóveda del Banco de Crédito sin cumplir los procedimientos esenciales establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera para controlar el lavado de dólares.

Se trataba de la misma familia Romero que ya había canjeado favores económicos por apoyo reeleccionista a Alberto Fujimori, así que el 2018 Keiko decidió devolverle el favor al "inversio-

-ROMERO: ¿FONDOS PARA LA CAMPAÑA?
-MONTESINOS: ¿FONDOS? PARA ESO ESTÁN LOS AMIGOS.
(RISAS)

El derecho de burlarse en paz



JUAN MANUEL ROBLES

Fujimori, condenarlo, era una forma de mirar hacia delante. La tarea era reconstruir el país luego de que la mafia se lo levantara en peso.

Algunos han dicho que el comunicado de Latina se justifica porque el canal fue blanco del terrorismo: Sendero Luminoso le puso un coche bomba en 1992. Ajá: la narrativa estúpida según la cual todo aquel que fue víctima del terrorismo debe apoyar a Fujimori por una suerte de deuda (como decir que las víctimas del terrorismo de Estado y sus hornos deben sentir alguna afinidad con la subversión). Así no funciona. De hecho, lo que hoy es Latina fue Frecuencia Latina, y recibió el ataque no solo de Sendero. En 1997, Fujimori, que ya había acaparado el control de los poderes con Montesinos, inició una ofensiva legal que sacó al accionista principal de la televisora, Baruch Ivcher. El canal se volvió un mauladar, la nueva administración botó a los mejores profesionales y colocó a bustos

parientes. Los Winter, accionistas que se prestaron al juego, decidieron la línea editorial en la salita del SIN. Lo peor de la propaganda desinformativa de Fujimori y Montesinos salió de allí: tremenda mancha en la historia de la estación que equivale a varios atentados.

Ivcher retomó el control del canal con la caída de Fujimori, y años después lo vendió a Enfoca, un fondo de inversión cuya única visión es ganar todo el dinero posible para vender cuando suba la marea. Es el tiempo que nos toca: el de la televisión privada sin *broadcaster* (en su lugar, tienen a Magaly Medina editorializando). Hombres de negocios que han demostrado que no quieren quedar mal con el poder. Mansos y sumisos, ¿defenderán la difusión de la memoria histórica sobre los

crímenes del finado? Su comunicado contra Masías —que parece salido de la época de los Winter— me hace pensar que no.

Era lo que tantos habían advertido: el negacionismo de los crímenes de Fujimori era el comienzo de un plan largo: primero, la desaparición de las referencias a esos delitos atacando a los espacios de memoria; luego, la apología al delincuente, sutil y después descarada; y ahora, la condena y las presiones contra quien se atreve a mencionar el prontuario. Hay un último paso en este proceso oscuro: la coacción para rendirle pleitesía al "héroe". Respetarlo a la fuerza. La presidenta —que en la campaña recordaba los crímenes de Fujimori— hoy se arrodilla aterrada.

El plan es que todos nos arrodilemos ante su falsificación histórica. Javier Masías, a quien conocí hace años y no tengo razones para defender —quienes nos conocen lo saben bien—, ha recordado, en estos días, que habrá también quienes se les planten, sin temor. ■

Ha sido alucinante ver lo que pasó cuando a Javier Masías, periodista y popular animador en El Gran Chef de los Pámosos —donde es una suerte de Simon Cowell peruano, por lo despiadado de sus veredictos—, se le ocurrió escribir un tuit justo después de la muerte de Alberto Fujimori. "Bailaré sobre tu tumba", dijo. Luego aclaró que se trataba de la letra de una canción y que no se refería a nadie en particular, pero todos entendieron la alusión (que Masías tampoco movió un pelo por desmentir). Lo que siguió fue la furia de casi todo el *establishment* periodístico y televisivo condenando a Masías por inhumano. Incluso Magaly Medina, soberana de la televisión basura que estuvo en la cárcel por mentir, pidió que lo suspendieran del canal donde trabaja. Algo falla cuando alguien como Medina puede erigirse como Madre Superiora y modelo de conducta. Todo parecía la histeria de siempre hasta que la propia Latina lanzó un comunicado institucional en que rechazaba las palabras de su conductor, Masías, y expresaba sus condolencias a los Fujimori.

Habría que agradecerle a Masías, porque lo que puso al descubierto es más grande que él. Ha quedado claro que en el Perú ya uno no se puede burlar de un criminal que muere en su casa, rodeado de los suyos y después de robar millones sin devolver un centimo. Uno no puede lanzar un insulto contra un sujeto que se fugó del país y tuvo que ser capturado, extraditado y encarcelado y que, aun así, se las arregló para comandar a su estirpe en la destrucción lenta y efectiva de lo poco que habíamos ganado como nación respetable. Uno no puede soltar una ironía usando una canción para reírse un poco de toda la rabia que siente cuando muere un asesino que nunca se arrepintió.

Es curioso: "bailaré sobre tu tumba" es una frase metafórica. Es lo que hicimos, simbólicamente, un montón de personas decentes y sensibles el 11 de setiembre cuando nos enteramos de la muerte del delincuente indultado. Para eso sirve el sentido figurado: no es que uno vaya a pararse en la tumba de Fujimori a zapatear. Solo gente perturbada camina encima de cadáveres frescos jactándose. De hecho, fue el propio Fujimori quien

pisoteó los cuerpos de los emerretistas abatidos luego del rescate de la residencia japonesa en 1997, y lo hizo ante cámaras, en un acto espantoso que lo pintó de cuerpo entero. Porque una cosa es sentirse satisfecho y hasta reírse por la muerte del enemigo o de quien no vale la pena (es lo que sentimos cuando murió Fujimori) y otra es caer en la barbarie.

No nos acusen de cosas que su líder sí cometió. No profanamos: nos reímos porque nos nace, y porque el

suceso lo amerita.

Cuando murió Pinochet un montón de chilenos pudieron decir libremente qué bueno que murió este genocida culiao. Cuando murió Videla, un montón de argentinos pudieron reírse a viva voz de un torturador masivo que murió en la celda mientras cagaba. La televisión y la prensa acogieron las reacciones. Por supuesto, hubo quienes manifestaron la opinión respetable de que había que dejar a esos señores descansar en paz, y optaron por el silencio, pero nadie cues-



Javier Masías: víctima de un ridículo cargamontón.

tionó el derecho de quienes sentían lo que sentían a desfogar la rabia, maldecir, burlarse.

Es algo no menor, digo, el derecho de bailar imaginariamente sobre la tumba de quienes nos hicieron daño.

Pues parece que en el Perú esa prerrogativa tiene amenaza de censura. Quien haga algo así en los medios hegemónicos recibirá un montón de presiones institucionales. Javier Masías es una figura que ha ganado importancia y fama y eso lo blinda: pero imaginen lo que le pasaría a un novato que trabajase en Latina y repudiara en público al dictador recién muerto. Por no hablar de la situación en otros canales.

Qué lejos quedaron esos tiempos en que el sentido común hacía condenar al prófugo —luego preso— Alberto Fujimori con desprecio franco. Lo normal era que un conductor de televisión con principios declarara su rechazo a Fujimori y a quienes lo reivindicaran. Y al hacerlo nadie iba a acusarlo de hablar con "odio". Al contrario, deslindar de

UNO NO PUEDE SOLTAR UNA IRONÍA USANDO UNA CANCIÓN PARA REÍRSE UN POCO DE TODA LA RABIA QUE SIENTE CUANDO MUERE UN ASESINO QUE NUNCA SE ARREPINTIÓ



El fujimorismo está vivo

Dicen que odiamos a Alberto Fujimori, que yace ahora cerca de la mujer a la que alguna vez encerró con soplete en una habitación de Palacio y a la que le negó la devolución de una suma de dinero usada en la campaña electoral.

Dicen que odiamos a Fujimori quienes tienen que odiar a su país y odiarse, en el fondo, a sí mismos para aplaudir póstumamente al hombre que arrasó con todo asomo de buena fe en la política peruana.

En todo caso, jamás odiamos a Fujimori: despreciamos lo que representaba y combatimos, cuando las papas quemaban, lo que hacía y fomentaba.

Fujimori está muerto, pero el fujimorismo está vivo. Ya lo hemos dicho: es la infección recurrente del Perú.

El fujimorismo está vivo en el Congreso, que es el bufete omnipotente de las mafias de la economía ilegal y la mesa de partes de los grandes grupos económicos. Está vivísimo, como imitación, en los apetitos de aquellas siglas vacías que se presentan como partidos para ver si pescan algo (rentable) en las elecciones del 2026 (todo un homenaje al ancestral y milagroso Cambio 90). Colea el fujimorismo en el tráfico limeño —remoto legado de la anarquía decretada hace 32 años—, en la simpatía popular que despierta la vulgaridad y la mentira bien pensada, en la celebración masiva de la estupidéz televisiva (herencia de la tele venérea que se inventó en los 90 para que la gente riera mientras perdía todos sus derechos, excepto el de la mendicidad). Late el fujimorismo en el acoso a las instituciones del poder electoral y es puro fujimorismo el Tribunal Constitucional salido de su colon descendente. Repta el fujimorismo en el nuevo intento de coparlo todo y habla el fujimorismo en boca del Defensor del Pueblo, creación bronquial del keikismo. Editorializa el fujimorismo en el columnismo tradicional y bosteza triunfalmente cuando Jaime de Althaus dice en "El Comercio" que si Fujimori se hubiese ido el año 2000 habría quedado como un gran presidente y habría vuelto, en olor de multitud, el 2005 "y ahora seríamos un país desarrollado".

Grita el fujimorismo en Willax y nos amenaza cuando su ma-

quinaria abogadil intenta —y quizá logre— que el Caso Cócteles vuelva a fojas cero por el peligro que supone que el empresariado sin escrúpulos sea expuesto en su calidad de abastecedor de fondos de Fuerza Popular.

El fujimorismo es el resumen de las taras peruanas, es la malicia que reunió en un puño las fuerzas más negativas, los talentos menos honrosos, las inclinaciones más temibles de nuestra idiosincrasia.

La primera de nuestras taras, como se ve a lo largo de la historia, es la propensión a perder la dignidad. El diagnóstico de González Prada describiéndonos como vasallos voluntarios de cuanto bárbaro nos mande el destino está vigentísimo y la percepción sobre nuestra debilidad de carácter, reseñada por San Martín, Bolívar y O'Higgins, podría hoy compartirse sin problemas.

Fujimori hizo de nuestros defectos su propia fortaleza.

Y lo que dejó fue un país tan roído por dentro, tan eviscerado, que da la sensación de estar resignado a vivir sin normas permanentes y a tolerar ser gobernado por gentuza.

Si aplaudes al hombre que permitió que se robara en cada compra militar y que encubrió al megaladrón que tenía como socio y consejero, pues entonces Pepe Luna te debe parecer un Churchill y Rosángela Barbarán una Pasionaria.

El Congreso del hampa que padecemos tiene el inocultable gen fujimorista: legisla a espaldas de los intereses que podrían ser nacionales y se ha trazado como meta tener en sus manos las decisiones de fiscales y jueces. Los años 90 han vuelto y el fujimorismo sueña con reinstalarse. Las lágrimas de cocodrilo del entierro son el riego por goteo de una nueva Pampa Bonita (esta vez regentada por algún Chlimper).

Nunca odiamos a Fujimori de modo personal, aunque él sí nos odiaba —lo sabemos— hasta desearnos la muerte. Despreciamos lo que hizo y lo que permitió hacer con el país que entregó, amordazado y sometido al miedo, a la derecha insaciable.

Hoy esa derecha pretende desaparecer a quienes le son incómodos. Su prensa infame terruquea y caviariza a quienes resisten, del mismo modo que la prensa de los Wolfenson y el canal de los Winter vertieron lodo sobre los que éramos disonantes en los tiempos del coro y de la anuencia.

No estaríamos como estamos si Keiko Fujimori hubiese aceptado la derrota del 2016. Envalentonada por sus 73 congresistas, dijo que gobernaría desde el Congreso. Y lo hizo. Gobernó desde el Con-

greso mientras un viejo atontado se divertía en Palacio. Hoy Keiko gobierna al lado de Dina Boluarte y sostiene un régimen putrefacto que tiene 91 por ciento de rechazo en las encuestas. El fujimorismo está en el poder, pero no le basta: quiere ejercerlo como lo hizo el tático japonés que hoy llaman "héroe": con descaro, sin reproches, con insolencia, sin reparos. Como se hacía cuando el pobre diablo de Torres y Torres Lara inventó "la interpretación auténtica" del artículo constitucional que impedía la doble reelección.

El fujimorismo está vivo y allí está, como ejemplo, Fernando Rospigliosi empujando la ley que permita que sean cuatro y no cinco los votos requeridos en el TC para resolver demandas competenciales. Está vivo y apesta más que nunca. Como diría el buen Mariátegui: la lucha continúa. ■



La heredera Keiko Fujimori y las infantas Kyara y Kaori.

FOTO CESAR ZAMALLOA

**REPTA EL
FUJIMORISMO EN
EL NUEVO INTENTO
DE COPARLO
TODO Y HABLA
EL FUJIMORISMO
EN BOCA DEL
DEFENSOR DEL
PUEBLO, CREACIÓN
BRONQUIAL DEL
KEIKISMO**



Disolverlo

¡Qué semanas tan horribles! ¡Qué días más abyectos! Apenas llegó la confirmación de la muerte de Fujimori, ya sabía lo que se venía: un cambio radical en la agenda. Justo cuando el Congreso debía reunirse en pleno para derogar la ley prodelinuencia, el escándalo de corrupción que involucra al excómico Andrés Hurtado "Chibolin" estaba en su pico y en la selva amazónica peruana los incendios empezaban a salirse de control, arrasando con flora, fauna y comunidades enteras. Boluarte lo dejó todo de lado porque no hay nada que le guste más a la señora presidenta que arrodillarse y rendirle pleitesía a las familias que realmente gobiernan el país.

Y era previsible, después de todo. Los funerales de Estado y las pompas fúnebres, que no debieron celebrarse habiendo sido un autócrata que disolvió el Congreso y que robó a manos llenas,

confirma que el fujimorismo gobierna en Palacio de Gobierno, junto con los Acuña y los Cerrón (esa tara de que el país sea dirigido por clanes políticos quizás sea el verdadero legado de los Fujimori). Y se veía venir, también, la chachara insufrible de los medios de comunicación, de los simpatizantes del "Chino" que se creyeron todas sus mentiras, que hicieron colas interminables en el frontis del Museo de la Nación donde, ironías aparte, ocurrió un aniego de aguas servidas.

Entonces, como se murió, todos los que recordamos las tropelías, los robos y las miserias de su régimen somos unos malvados, según ellos. Unos "odiadores", como lo proclamó Keiko en el mitin de las exequias del padre, poco menos que seguidores y adoradores de Abimael Guzmán. Porque tenemos memoria y sabemos que

el autócrata al que quieren beatificar fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por los crímenes del Grupo Colina, escuadrón de la muerte al que felicitó y trató de amnistiar, que mandó a secuestrar a Dyer y Gorriti, y que frente a los crímenes de corrupción, simplemente se allanó, reconociendo los asaltos al erario público, incluyendo los US\$ 15 millones que le entregara a Montesinos y los US\$ 200 millones que se encontraron en Suiza.

Podría seguir, por supuesto, pero entonces esta columna se convertiría en una larga lista de lavandería: la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, los diarios chicha, la venta de armas a las FARC, la degradación de las instituciones, la humillación de las fuerzas armadas... La renuncia por fax, las 45 maletas que se llevó a Brunéi, el viaje sin retorno, su



PEDRO CASUSOL

intento de alcanzar un sitio en el senado japonés. Pero somos nosotros, los que arqueamos las cejas ante el show mediático que se armó alrededor de la muerte del dictador, unos malagradecidos, insensibles, incapaces de reconocer todos los logros de su gobierno. Fujimori no estuvo preso por las cosas buenas que pudo haber hecho, como dice su progenie. Afirmar eso es intentar cambiar la historia. ¡Habrás visto!

Creo que no estaría escribiendo estas palabras si el velorio de Fujimori hubiera sido una ceremonia íntima, constreñida a sus deudos y seres queridos, sin intentar elevar el mito de Fujimori como gobernante que impuso el orden y trajo prosperidad, sin advertir que muchos (casi todos) los problemas que tenemos ahora comienzan en la década de 1990. Pero lo que constituye un crimen de Estado es darle la espalda al país como lo ha hecho Dina Boluarte, solo para agacharse ante su jefa política y ser parte de la pantomima que transmitieron por televisión y radio durante tres días seguidos. Fujimori se disolverá en la bruma de la historia, aunque intenten usar su imagen de capital político. Pero aquí se quedará Dina Boluarte, y ella tendrá que pagar por sus propios crímenes. ■

Mis años con la dictadura



ROBERTO RAMÍREZ MANCHEGO

Nací en 1988 y mi niñez transcurrió en un país sometido a la dictadura. En el país de mi infancia, Sendero Luminoso campeaba en las tinieblas, dinamitaba coches y desplegaba su furia totalitaria contra la ciudadanía; miembros del ejército ajusticiaban campesinos, imponían el terror contra el terror y el asesinato por capricho. Los paramilitares del régimen —el infame grupo Colina— mataban heladeros inocentes en Barrios Altos (incluyendo a un niño de 8 años), desaparecían estudiantes y silenciaban a quienes exponían sus prácticas macabras. El terror de Sendero Luminoso y el terror de Estado estrechaban sus manos sangrientas, aplastando los derechos humanos.

En el país de mi infancia, el GEIN trabajaba con discreción, logrando la captura de Abimael Guzmán, pero Fuji-

mori se arrogaba el éxito del operativo. En mi infancia se exhibía al líder terrorista como una bestia, pero a esa misma bestia Montesinos le escribía cartas, lo trataba de doctor y le endulzaba el paladar con chocolates. La derrota del senderismo fue el escaparate que necesitaba el régimen para imponer su marca: el abuso, la corrupción y la tiranía disfrazada de orden.

En el país de mi infancia nacia una constitución espuria —promulgada por un congreso constituyente signado por el hampa— que blanqueaba un golpe de Estado e imponía una reelección que la anterior no había prescrito y convertía a la democracia en una caricatura. Se remataban las empresas públicas y el régimen se embolsicaba millonarias sumas producto de la venta; los congresistas se vendían a granel, la escasa oposición era atormentada y el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones eran tentáculos de la mafia.

En los periódicos de mi infancia, la verdad era una quimera y las vedettes de "Risas y Salsa" flanqueaban los titulares con sus traseros, mientras una virgen de yeso lloraba, un cerdo nacía con tres colas y el anticristo siempre estaba por venir. Fujimori desplegaba su populismo miserable inaugurando colegios y llevando ollas a los comedores populares. Sus adversarios políticos eran "pitucos", "chabones", "diabólicos" o "terrucos". En los diarios chicha convivían —en promiscuidad— la fantasía boba, el crimen, la mentira y el ataque a los críticos del régimen.

En el país de mi infancia, las tropas ecuatorianas invadían territorio peruano y la autocracia de Fujimori regalaba Tiwinza, mientras le hacía creer a la ciudadanía que nos habíamos hecho respetar como Estado. Fujimori evacuaba sobre su constitución y se aprobaba la "ley de interpretación auténtica" —mediante la cual intenta-

ba perdurar en el poder— mientras el congreso destituía a los miembros del TC que declaraban inaplicable la ley. En el país de mi infancia, Keiko Fujimori era ungida como primera dama, avalando así la dictadura de su padre.

En el país de mi infancia se destruían los derechos laborales y numerosos trabajadores eran arrojados a las calles, los dueños de los principales canales de televisión se vendían al régimen y el periodismo independiente era una rareza, igual que hoy. Fujimori desregularizaba el sistema de transporte y las pistas se volvían corredores de la muerte. Combis, ticos y buses con papeletas reinaban en la impunidad, convirtiendo en ciudadanos de segunda clase a los pasajeros y al peatón. El legado dura hasta ahora.

En los últimos meses de mi infancia, Fujimori se re-reelegía gracias a una maquinaria de firmas falsas y "El baile del chino" era el fondo musical de la corrupción, el abuso y la degradación del gobierno. El régimen corrupto le vendía armas a las FARC y meses después la dictadura caía por obra de un video que mostraba las trapacerías del poder. Fujimori fugaba con 45 maletas a Japón y renunciaba por fax a la presidencia. Y así —en un país quebrado económicamente, envenenado por el virus del latrocinio y la corrupción— me fui haciendo adolescente. ■

Metáfora del Perú



CARLOS LEÓN MOYA

Andrés Hurtado lleva casi 40 años como personaje público, de espectáculos, y ahora es investigado por lavado de activos. Sin embargo, las sospechas sobre el origen de sus ingresos son antiguas: vienen, literalmente, del siglo pasado.

Pero Hurtado, conocido como "Chibolín", es más que un animador con ingresos oscuros. Es una metáfora del Perú actual, y tan podrido como él. Junta alrededor suyo todas las áreas posibles de este país.

Creció en el Callao. Luego, se volvió famoso en los programas cómicos de los noventa, casi siempre con sus imitaciones de mujer, rodeado de vedettes. En paralelo, tenía amigos especiales, como el narcotraficante Demetrio Chávez Peñahe-rrera, alias "Vaticano" (que era aliado de Pablo Escobar y tenía relaciones estrechas con Vladimiro Montesinos, siamés de Alberto Fujimori).

"Chibolín" llevaba a vedettes y figuras del espectáculo a Campanilla, en la región San Martín, donde estaba "Vaticano".

Hugo Coya hace el paralelo entre "Vaticano" y los narcos colombianos: estos gustaban de tener a personas famosas a su lado, pues era una ostentación de poder. Sea la Miss Colombia, sea René Higuita. "Vaticano" hizo lo propio, pero a escala nacional: Susan León, "Chibolín".

Con "Vaticano" preso y con los 2000 encima, "Chibolín" intentó un gran cambio: quiso que lo dejaran de llamar

"Chibolín". Ahora era Andrés Hurtado, un hombre respetable, de altos ingresos, y con ropa de marca. Carlos Cacho dijo entonces que Hurtado tenía uno de los

"mejores clósets de Lima", y Hurtado —o "Chibolín"— mostraba en televisión sus sacos Versace, aunque eran todos horribles. Los ingresos no compran tanto.

Pero nadie se preguntó de dónde salía ese dinero. Beto Ortiz le preguntó en vivo si era proxeneta, algo que se rumoreaba. Hurtado rompió una copa fingiendo indignación. Siguió como si nada.

Entonces, la persecución del lavado de activos era muy difícil. Ahora, los acusados deben mostrar cuál es el origen lícito de sus ingresos; antes, en cambio, eran las autoridades quienes debían probar el origen ilícito. Pongamos un ejemplo. Hace un par de años, Hurtado compró un whisky de 10 mil dólares en México, frente a las cámaras de televisión. Las autoridades bien podrían preguntarle por el origen de ese dinero y observar todos sus ingresos, y Hurtado debería mostrar que no existe un desbalance. Si lo hubiese, es

que o no paga impuestos o ese dinero tiene un origen ilícito (digamos, una caja de zapatos llena de dólares producto de un favor a un minero ilegal).

¿A qué iba esta digresión? A que, desde los noventa, "Chibolín" mostraba unos gastos superiores a sus ingresos por su trabajo "artístico", si es que se le puede llamar artista. Sin embargo, todos nos centramos en lo anecdótico: que presumiera de la marca de su ropa y que quisiera borrar a Luz Gordita.

Ahora, volvamos al caso colombiano,

el de los narcos juntándose con figuras del espectáculo, y no de la política, para ostentar poder. "Chibolín", que ya era del espectáculo, hizo la otra ruta: si quería ostentar poder, no bastaba con un whisky o un saco. Debía juntarse públicamente con políticos.

Y así lo hizo desde el 2021, con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. Y ambos, carentes de luces y principios, lo recibieron con fotos y abrazos. Era el avance de Chibolín: del Callao a Miami, de Luz Gordita a señor Andrés, de "Vaticano" a Hernando de Soto. Pero, por supuesto, nunca sacó el pie del lado turbio. Si no, ¿cómo mantenía su influencia? Sus vínculos con mineros ilegales, y con jueces y fiscales que los favorecen tanto que hasta les devuelven lo incautado, son prueba de ello.

¿Y cuál es la metáfora del Perú, entonces? Pues que la trayectoria de "Chibolín" muestra que, lo que en los noventa eran mundos aparte, en los 2020 son mundos que juntan como si nada y sin vergüenza. En los noventa estaban los narcos por un lado, con la venia de altas autoridades del gobierno para sus negocios, contratando a famosos para que les alegren el campamento, y estos recibiendo un ingreso por su amistad. No eran compartimientos estancos, pero eran mundos diferentes.

Ahora, está todo mezclado: Hurtado es el representante legal de "Vaticano", sentenciado por narcotráfico, y salía en televisión todos los sábados e invitaba al alcalde de Lima a su programa y se convirtió en "asesor" de un candidato presidencial, y es a la vez cercano a presuntos mineros ilegales y hasta los habría ayudado a que les devolvieran una carga con sus amigos del Poder Judicial. Y estos presuntos mineros ilegales —la familia Siucho— fueron defendidos por Mateo Castañeda, el mismo abogado de la presidenta de la República. Y al medio de todo, está "Chibolín".

La trayectoria de Andrés Hurtado es un triste ejemplo de en qué nos hemos convertido. Economías ilegales, política, espectáculo y problemas judiciales están ahora juntos, mezclados, tanto en "Chibolín" como en el Perú. Hurtado no es una excepción, sino una metáfora. ■



Andrés Hurtado, alias Chibolín: tan podrido como el país.

ECONOMÍAS ILEGALES, POLÍTICA, ESPECTÁCULO Y PROBLEMAS JUDICIALES ESTÁN AHORA JUNTOS, MEZCLADOS, TANTO EN "CHIBOLÍN" COMO EN EL PERÚ

Consenso «mayoritario»

Aún hoy es común encontrar en los medios de comunicación expresiones como «La medida fue tomada por consenso mayoritario», «El Congreso aprobó el proyecto de ley por consenso mayoritario» o «Los miembros del directorio llegaron finalmente a un consenso mayoritario». Lo más probable es que quienes engendran estas frases ignoren el significado preciso de «consenso», pero cabe, asimismo, la posibilidad de que, tras esa aparente

ignorancia, se esconda la intención de crear en el público la falsa impresión de una unanimidad inexistente.

En efecto, según el «Diccionario de la lengua española» («DLE»), «consenso» significa 'acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos'. Dicho de otro modo, para que exista consenso, un acuerdo debe ser

tomado de manera unánime, no por mayoría. Por tanto, la expresión que nos ocupa resulta absurda. ¿Por qué no decir, en su lugar, que se llegó a un «acuerdo mayoritario»?

También resulta incorrecta, en este caso por redundante, la expresión «consenso unánime». Como se ha visto, todo consenso supone, por definición, unanimidad, o no puede ser considerado como

tal. Lamentablemente, algunos informadores escriben oraciones del tipo «Al fin se logró un consenso unánime entre las partes» y «Contra lo esperado, la decisión se tomó por consenso unánime».

Por otro lado, la Fundéu nos recuerda que «consenso» no equivale a «quórum», vocablo referido, más bien, al número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome acuerdos y a la 'proporción de votos favorables requerida para que haya acuerdo'. En muchos textos se prefiere la grafía «quorum», pero, por tratarse de un término propio del latín, debe escribirse en cursiva, como cualquier otro extranjerismo. ■



RICARDO VERA LEYVA



RONALD GAMARRA

Nuestro país vive bajo la permanente amenaza de los desastres naturales y debemos aprender a convivir con ellos, previniéndolos, controlándolos y mitigando activa y eficazmente sus efectos negativos. Esto es un principio, una verdad que todos los peruanos deberíamos haber interiorizado como un axioma evidente por sí mismo, pero lamentablemente no aprendemos aún, empezando en primer lugar por el Estado y sus autoridades, que casi siempre están en la luna y resultan sorprendidos por una nueva calamidad cuya inminencia casi siempre parece tan anunciada como el asesinato de la crónica de García Márquez.

Esta vez se trata de la serie de incendios forestales y rurales que, por decenas, se registran en casi todos los departamentos del país. Se están produciendo desde mayo, pero se han intensificado en las últimas semanas: una racha de más de 200 siniestros. El día en que escribo este artículo hay casi 40 fuegos simultáneos. En todo esto se deben ver los efectos del cambio climático global, pues se reportan incendios forestales de grandes proporciones en varios países de la cuenca amazónica y de otros continentes. La fuerte y prolongada sequía, así como ciertas prácticas agrícolas inadecuadas, están entre las causas de la catástrofe. Como consecuencia, no menos de 15 personas han perdido la vida y miles de hectáreas agrícolas y una porción enorme del bosque, sobre todo en la ceja de montaña, han sido arrasadas.

Lo peor es que el gobierno y este congreso han estado en todo momento ocupados en cualquier clase de intrigas y manejos antes que enfocarse en atender la emergencia que sufre la gente. Sobre todo, la semana anterior, uno y otro se dedicaron a perder el tiempo en un pomposo homenaje de estado a un expresidente que no tenía derecho a ello por haber sido condenado judicialmente por graves violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción. Pero qué puede esperarse de una administración y un parlamento corruptos y con las manos manchadas de sangre, sino que rindan homenaje

servil a un exmandatario deshonesto y matarife.

Este gobierno decreta tres días de duelo nacional por el fallecimiento del culpable de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, pero se niega a declarar el estado de emergencia que le solicitan formalmente 12 de los 22 gobiernos regionales afectados por los incendios forestales, resta importancia al desas-

tre y no hace nada realmente efectivo para organizar la lucha contra el fuego, la asistencia de emergencia a las víctimas y la organización de la población para prevenir y mitigar nuevos desastres. La población reclama airada por la negligencia criminal de las autoridades nacionales, pero no es oída ni atendida. Toda esta actitud sintetizada en la respuesta indiferente y hostil de Dina Bo-



Incendios forestales: un fenómeno que el calentamiento global ha extendido.

luarte a un periodista del departamento de Amazonas que había informado con emoción sobre la tragedia de su tierra: "No necesito sus lágrimas, señor".

Mirando un poco más allá de la contingencia de hoy, es evidente que nuestro país carece de un sistema eficaz de prevención de desastres y defensa civil. Hay instituciones y no faltan los buenos especialistas en ellos, que incluso identifican los peligros y advierten a tiempo sobre estos a las autoridades que deben tomar decisiones. Pero sucede que no son escuchados y su voz no es tomada en cuenta en las decisiones de un gobierno volcado casi por entero a complotar y servir intereses nada santos. Nuestro país, es decir nuestra gente, en la práctica se enfrenta desarmada, desorganizada y desorientada a los desastres de la naturaleza. Esto potencia los efectos de la devastación, el número de damnificados y la dimensión de los daños. Plantamos cara cada vez a adversidades anunciadas como si fuera siempre la primera vez que ocurren.

LA POBLACIÓN RECLAMA AIRADA POR LA NEGLIGENCIA CRIMINAL DE LAS AUTORIDADES NACIONALES, PERO NO ES OÍDA NI ATENDIDA

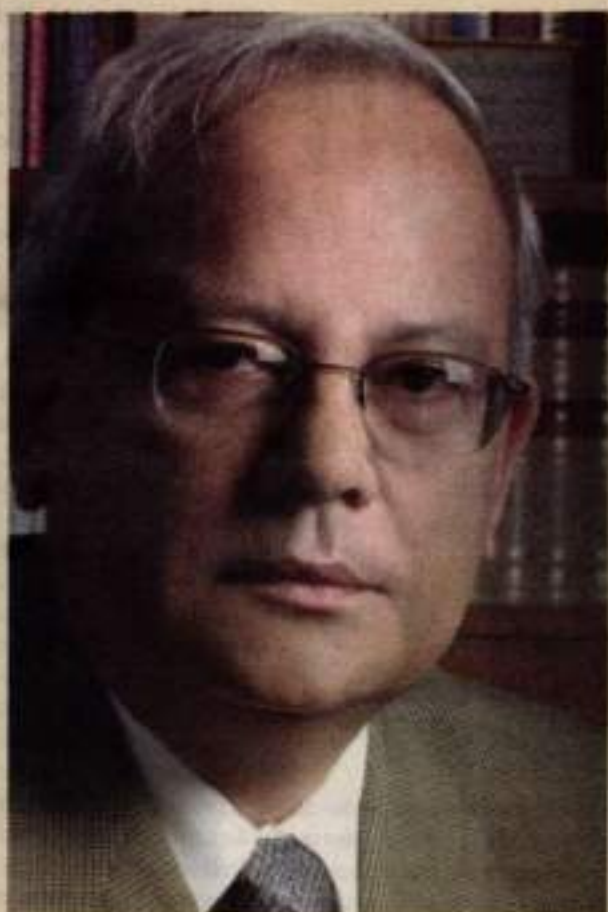
Y no es así. Nuestra experiencia con los desastres naturales es milenaria y cotidiana. Sin embargo, ocurre que las prácticas de prevención y mitigación propias de las culturas autóctonas han sido sistemáticamente menospreciadas y abandonadas, y se les ha sustituido por la más anárquica búsqueda de conveniencia individual con olvido y desatención culpable respecto a las condiciones que nos imponen la geografía, los fenómenos naturales, la condición sísmica de nuestro país. Es así que se ha auspiciado una urbanización y modernización irrespetuosas de la naturaleza, favoreciendo la erosión de los suelos, la tala de los bosques, el derrame de relaves, la construcción en los cauces de torrentes y huaycos, la construcción sin adecuado control de los suelos y las técnicas de construcción en un país altamente expuesto a los sismos.

Por eso, una política central de todo gobierno peruano debería ser fortalecer y desarrollar la competencia de los organismos de prevención de desastres y la defensa civil, así como la capacitación de personal especializado y de la población en general. La verdad es que, en lo inmediato, necesitamos contar con un aparato idóneo y equipado para intervenir en todo el país ante los azotes naturales, cuya voz sea oída y respetada por el ejecutivo. No es posible que no contemos con aviones y helicópteros debidamente preparados para combatir incendios forestales como ocurre ahora. Pero lo cierto es que ni siquiera se tiene equipos para atender emergencias urbanas cotidianas como los accidentes de tránsito, por ejemplo. Solo hace falta ver en qué condiciones precarias trabajan los bomberos desde siempre.

Contar con una sólida organización de prevención de desastres y defensa civil, preparada para actuar eficazmente a todo nivel, debería ser un objetivo básico de toda administración, pero ninguna hace nada al respecto. Algo quiso realizar el general Velasco después del cataclismo de 1970 y por eso creó el Sistema de Defensa Civil como organismo público. Después, ningún gobierno lo ha fortalecido como se debía y todos lo han mantenido como una entidad marginada, de la cual solo se acuerdan cuando de veras ocurre una calamidad y que, entonces, no sirve de mayor ayuda. Los peruanos deberíamos saber ya, por amarga experiencia propia, que una presidencia que no fortalece la defensa civil empeora la magnitud de la desgracia. Lamentablemente vivimos tan pegados al día a día, que no nos alcanza la vista para ver más allá de la siguiente tragedia. ■

**Todos los lunes, antes de las 9 de la noche,
siga en vivo el *Podcast de César Hildebrandt***

**Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial**



**Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
139,241 suscriptores y ha
sumado **12'898,920 vistas****



HILDEBRANDT
en sus trece

¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Un presidente que hizo historia



YBRAHIM LUNA

Publicando el libro "¡Gracias!", promulgando una peliaguda reforma judicial y con una aprobación de más del 60%, se despide uno de los presidentes más populares de América Latina. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (Tabasco, 1953), conocido por sus conferencias matutinas y tras un sexenio donde buscó consolidar su propuesta de la "Cuarta Transformación" —las previas fueron la Guerra de la Independencia (1810), la Guerra de la Reforma (1858) y la Revolución mexicana (1910)—, dejará la batuta este 30 de septiembre a su camarada partidaria y primera presidenta electa de México, la científica Claudia Sheinbaum Pardo.

La oposición lo acusa de populista, de no haber frenado la violencia delictiva y de promover una reforma que usará para elegir a jueces allegados a su partido "Morena" (identificado como de izquierda democrática). Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por su parte, lamentan que el gobierno no cumpliera su promesa de dar con la verdad. Lo cierto es que AMLO ha remecido la política tradicional de su país y ha inaugurado una nueva forma de ejercer el poder desde la intelectualidad de la clase media. La "Cuarta Transformación", según su promotor, busca remecer los cimientos de la sociedad mexicana para acabar con las estructuras corruptas del poder.

"Vamos a tener la primera presidenta de México en 200 años. Si sumamos los 300 de dominación colonial, estamos hablando que desde hace 500 años no gobernaba nuestro país una mujer...", expresó López Obrador, en compañía de Sheinbaum (quien ganó las elecciones presidenciales en junio con el 59.7%, logrando también una mayoría congresal), en un video publicado en su cuenta de X el 15 de septiembre, el mismo día de las celebraciones por la Independencia de México. Y continuó: "Voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque

necesitamos que la justicia llegue a todos. Que [...] apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie".

La parte medular de la reforma judicial establece que jueces y magistrados serán elegidos por voto popular.

Luego de firmado el decreto, por la noche del 15 de septiembre, miles de personas desbordaron el Zócalo de la Ciudad de México para despedir a

AMLO. ¡Viva la Cuarta Transformación!, arengó el aún presidente desde el balcón de Palacio Nacional. Durante las celebraciones del Grito de Independencia por los 214 años de soberanía, López Obrador lanzó vivas por los migrantes y trabajadores mexicanos.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá la tarea de llevar adelante la implementación de la reforma más grande de un sistema judicial en Amé-



Andrés Manuel López Obrador: se va con 60% de aprobación a pesar del fuego concentrado de la prensa conservadora.

rica Latina y lo hará en dos fases, en 2025 y 2027. El debate sobre la reforma empezó con un paquete de propuestas constitucionales que AMLO presentó en febrero de este año ante la Cámara de Diputados, donde la reforma fue aprobada el 4 de septiembre en medio de protestas y bloqueos de estudiantes universitarios y trabajadores del Poder Judicial. Y fue refrendada "en lo general" el 11 de septiembre por la Cámara de Senadores por mayoría calificada, con 86 votos de "Morena" y sus aliados. Lo singular fue que el voto que necesitaba el oficialismo vino de la oposición, del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, a quien la oposición ha tildado de traidor y de estar presionado por el gobierno con acusaciones de corrupción. La reforma también necesitaba ser admitida por la mayoría de las legislaturas estatales, unas 18, asunto que ya se logró. El actual Poder Judicial ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales para revertir lo aprobado.

La reforma judicial establece que

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarán listas paritarias de candidatos para ser sometidas a elección popular. Entre 1,600 y 2,000 jueces, magistrados y miembros de la Corte Suprema pondrán su cargo a disposición. Se creará un Tribunal de Disciplina Judicial para examinar los casos de negligencia y corrupción. También se designarán "jueces sin rostro" para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Se eliminarán las pensiones vitalicias, se reducirá el tiempo en los cargos y se rotará a las autoridades cada cierto tiempo. Estados Unidos ha sido uno de los primeros países en criticar la medida asegurando que se está creando "un riesgo mayor para la democracia". La Relatoría de la ONU ha pedido que se reconsidere el proyecto porque "la destitución de jueces podría retrasar la justicia". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch también han manifestado su preocupación por las "posibles afectaciones a la independencia judicial".

La aprobación de esta megareforma no hubiese sido posible sin la contundente popularidad de AMLO. ¿Y cuáles fueron las razones para tal popularidad y aprobación de gestión en el sexenio 2018-2024? La BBC Mundo y France24 consultaron a analistas políticos y las conclusiones a las que arribaron fueron similares: buen manejo de la economía, calidad informativa y consecuencia política. Con AMLO se produjo uno de los mayores aumentos salariales (un 120%) y el po-

der adquisitivo se incrementó en más del doble. Los programas y beneficios sociales crecieron en un 55%. Se destaca que, a pesar de los temores iniciales en 2018, se mantuvo el equilibrio fiscal macroeconómico y la inversión extranjera llegó a un nivel récord. El peso se fortaleció frente al dólar, el desempleo bajó al 2.7% y hubo apuesta por la gran infraestructura (como el Tren Maya). A pesar de la pandemia del covid, entre 2018 y 2022 alrededor de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza; y en lo internacional México recobró un papel protagónico en el debate político.

La gran deuda de AMLO, quien ha prometido retirarse de la vida pública tras concluir su mandato para vivir en su rancho "La Chingada" (no es broma), es con la salud pública, la que se propuso equiparar "con la de Dinamarca". Sus iniciativas contra la inseguridad ciudadana (los homicidios dolosos aumentaron drásticamente) y la corrupción tampoco dieron los resultados esperados. ■

**EL PESO SE FORTALECIÓ
FRENTE AL DÓLAR, EL
DESEMPLEO BAJÓ AL 2.7%
Y HUBO APUESTA POR LA
GRAN INFRAESTRUCTURA**



*Las columnas más
leídas están en*

HILDEBRANDT *en sus trece*

*Cada semana, textos que nos
ayudan a saber de qué se trata*

Sí matarás

► El ejército israelí ha reincidento en una de sus especialidades: asesinar activistas desarmados y plenamente identificados

ELIA Y. DIZ

Aysenur Ezgi Eygi tenía 26 años cuando llegó a Cisjordania el pasado miércoles 4 de septiembre. Cuarenta y ocho horas después fue asesinada por un francotirador del ejército israelí. La joven activista, de nacionalidad estadounidense y nacida en Turquía, se había graduado en mayo pasado en la Universidad de Washington. Y había decidido unirse a la organización *International Solidarity Movement (ISM)*, un movimiento de resistencia pacífica contra la ocupación israelí del territorio palestino. Esta es la tercera vez que Israel ejecuta impunemente a un activista de la ISM.

"Fue para ser testigo del pueblo palestino y su lucha", dijo Kelsie Nabass, una de sus amigas, al medio de comunicación *Al Jazeera*.

El asesinato ocurrió el pasado 6 de septiembre, cerca de las 2 de la tarde, cuando Aysenur Eygi participaba en un plantón pacífico en Beita, un pueblo cercano a Nablus.

La historia de Rachel Corrie se repite.

Durante la Segunda Intifada, el 16 de marzo del 2003, en Gaza, tres soldados israelíes se disponían a destruir un caserío palestino en el vecindario Hi Es Salam (Rafah). En su camino se plantaron ocho activistas de la ISM. Rachel Corrie era una de ellos.

Durante dos horas, vestidos con chalecos amarillos fosforescentes y armados con megáfonos, Corrie y sus camaradas se interponían entre las casas y la maquinaria destructora. Hacían de "escudos humanos" con-

fiando que sus pasaportes —cuatro de Estados Unidos y dos de Reino Unido— serían suficientes para disuadir a los soldados. Mientras los activistas correteaban los bulldóceres, un tanque los monitoreaba, disparando al suelo de vez en cuando para ahuyentarlos.

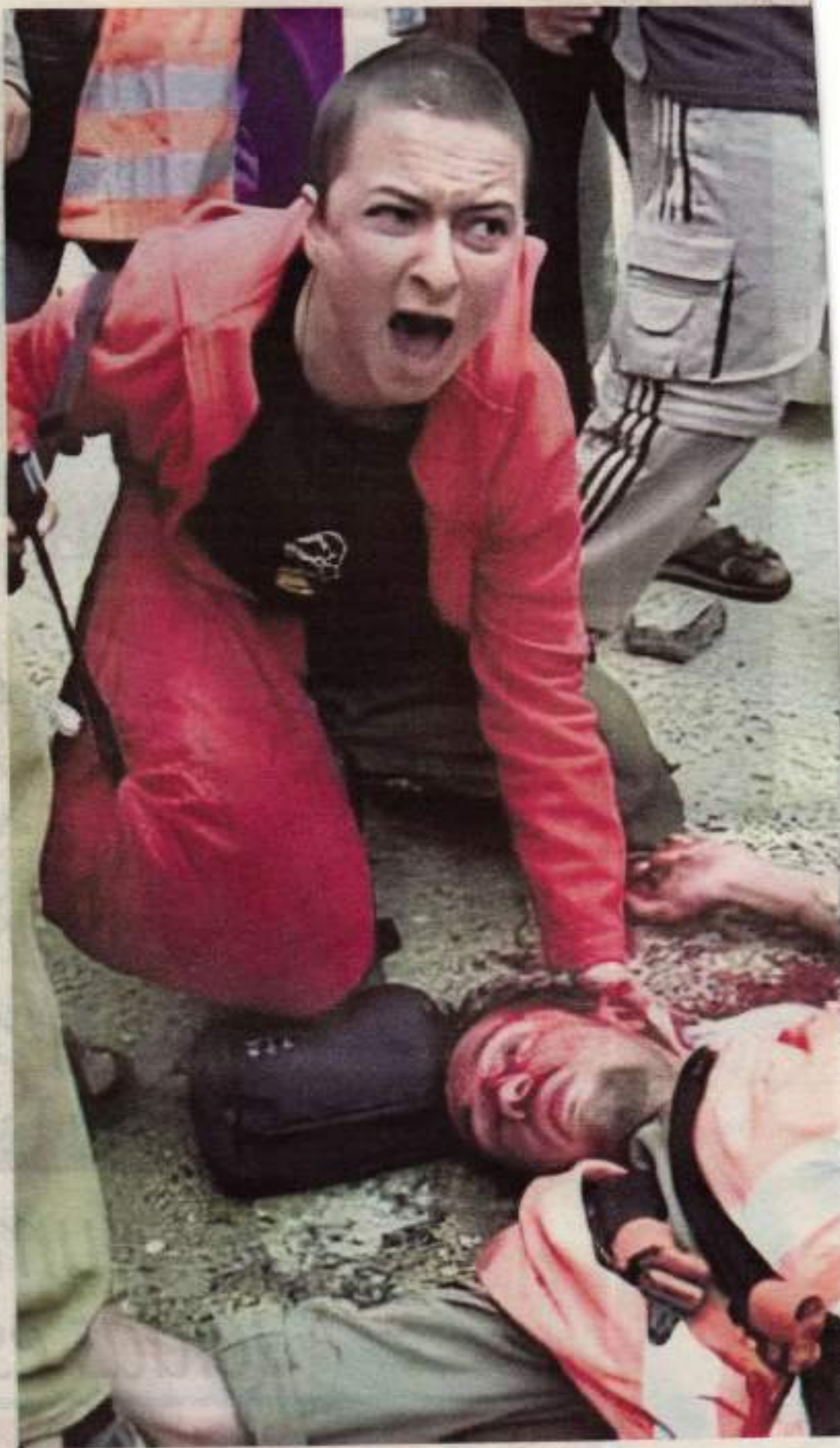
A las 4:40 de la tarde uno de los dos bulldóceres empezó a avanzar en línea recta hacia Corrie. El soldado condujo sin detenerse, recorriendo 10 metros de la explanada hasta llegar donde estaba la joven. Ella, plantada, le gritaba a través de un megáfono. El soldado bajó la cuchilla de la máquina, la puso a ras del suelo y continuó avanzando. Después, levantó la tierra debajo de Corrie, elevando a la joven hasta la altura de la cabina. Mientras, en el suelo, los demás voluntarios le imploraban al soldado que frenase.

En un momento determinado, Corrie cae y va a parar frente a la excavadora. El montículo de tierra le cae encima y el soldado aprovecha para pasar con el bulldócer por encima de ella. Primero hacia adelante y luego en marcha atrás. Después, todos los soldados huyen de la escena del crimen.

"Corrí hacia ella. Estaba en el suelo, jadeando, con la cara cubierta de sangre y cortada. Era evidente que tenía una hemorragia cerebral. Murió en la ambulancia minutos después. Era una persona brillante, inteligente y asombrosa, inmensamente valiente y comprometida. Se ha ido y no puedo creerlo", narró su compañero de nacionalidad británica Tom Dayle, testigo del asesinato, a la revista estadounidense *"The Electronic Intifada"*.

"Estoy siendo testigo de

Una activista británica, compañera de Tom Hurndall, sostiene la cabeza del joven moribundo momentos después de haber sido víctima de un francotirador israelí en Rafah el 11 de abril del 2003. (Foto: AP-Khalil Hamra).



la destrucción sistemática de la capacidad de las personas para sobrevivir. Es increíblemente horroroso", había declarado Rachel Corrie al canal *"Middle East Broadcasting"* dos días antes de morir.

El Estado israelí sigue arguyendo que el asesinato de Corrie fue un accidente.

Tom Hurndall estudiaba fotografía en la Universidad Metropolitana de Mánchester cuando, en enero del

2003, decidió mudarse a Jordania. Quería asistir a los refugiados iraquíes víctimas de la arremetida estadounidense en su país. Allí entró en contacto con el movimiento ISM y, en abril de ese mismo año, se trasladó a Gaza. Cuando Tom Hurndall llegó a la ciudad de Rafah tenía 21 años. Rachel Corrie acababa de ser asesinada.

Llevaba pocas semanas en la Franja cuando Hurndall y el resto de miembros

de la ISM se sumaron a una protesta por el asesinato de dos niños en un campamento de refugiados de la UNRWA. En medio de la manifestación un francotirador abrió fuego.

Mientras reinaba el pánico, Hurndall rescató a dos niñas pequeñas paralizadas en medio de la calle. El fotógrafo, protegido sólo por su chaleco amarillo fosforescente, las cargó y las llevó fuera del alcance de las balas.



"Cuando venía de regreso, vio a un niño escondido detrás de una barrera (...). Estaba aturdido, petrificado. Tom fue a cargarlo, se inclinó hacia él con los brazos extendidos. De repente, la sangre y los sesos comenzaron a derramarse sobre su pecho", narró un compañero del activista, testigo del asesinato, a la ONG Human Rights Watch.

"Oí el disparo, oí un grito y me di vuelta para ver el



El viernes 6 de septiembre Aysenur Eygi (26) fue asesinada por un soldado israelí mientras participaba en una demostración pacífica en Beita, un pueblo cercano a Nablus. Eygi se había graduado en mayo de la Universidad de Washington con un título en psicología y otro en estudios de Oriente Medio.



Rachel Corrie tenía 23 años cuando el 16 de marzo del 2003 fue muerta por un soldado israelí con una excavadora estadounidense marca CATERPILLAR INC.

bulto amarillo fluorescente tirado en el suelo, con sangre saliendo de su cabeza. Me moví de un lado a otro sin saber qué hacer, y en cuestión de segundos mi formación médica hizo clic (...). No podía hacer que se detuviera. Segundos después los palestinos lo le-

vantaron de nuevo y lo metieron en un taxi. '¡Esperen a la ambulancia!', tratamos de convencerlos. Pero estaban histéricos, lo apartaron de nosotros y lo llevaron rápidamente al hospital en un Mercedes marrón", escribió Joe Smith, otro testigo, en "The Electronic Intifa-

da" (2003).

Tom Hurndall estuvo en coma 9 meses antes de morir el 14 de enero del 2004. Su asesino, el francotirador israelí condecorado Taysir Hayb, cumplió seis años de condena. Salió libre el 2011 por "buen comportamiento".

Y han vuelto a asesinar.

Tras conseguir su doble título, en Psicología y Estudios de Medio Oriente, Aysenur Ezgi Eygi empezó a prepararse con la ISM. El activismo no era nuevo para ella.

El 2016 se opuso a la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte (EE.UU.) que estaba en territorio indígena. En los meses previos a graduarse, cuando los campamentos estudiantiles exigían boicot académico a Israel, Eygi representó a sus compañeros en las negociaciones con la administración de la Universidad de Washington. No se sabe con exactitud cómo ingresó a Cisjordania.

La mañana del viernes 6 de septiembre Eygi, con el chaleco amarillo fosforescente puesto, se dirigió con el resto de voluntarios hacia Beita, un pueblo cercano a Nablus. Allí, cada viernes, activistas y pobladores se reúnen para protestar en contra de la colonia ilegal israelí Evytar, que fue anexada oficialmente este año.

Sobre las 2 de la tarde, un grupo de soldados comenzó a disparar desde los tejados de las casas. Adujeron que alguien les había lanzado piedras. Las descargas duraron varios minutos, hasta que los pobladores empezaron a dispersarse y quedaban sólo los activistas de la ISM.

Cuando finalmente se hizo el silencio, Eygi se sintió segura. Salió de detrás del contenedor de basura donde se había refugiado y se acercó a un olivo donde estaba otro voluntario parapetado. Inmediatamente, hubo dos disparos: una bala se incrustó en la pierna del joven, la otra atravesó el cráneo de Aysenur Eygi.

"Cuando escuché los disparos, me giré e inmediatamente la vi en el suelo, bajo el olivo, desangrándose. Puse mi mano bajo su cabeza, para parar la sangre, e intenté tomarle el pulso", dijo Jonathan Pollak, miembro de la ISM y testigo del asesinato.

Eygi murió a las 2:35 p.m. en el Hospital Rafidia, en Nablus. Su familia tardó más de una semana en repatriar su cuerpo. La enterraron en su ciudad natal, Didim, en Turquía.

Israel ha vuelto a argüir que fue un accidente. ■

Penales cobrados

► La muerte por sicariato de una funcionaria del INPE en Chinchipe pone sobre el tapete una amenazante realidad: los presos más sanguinarios están tomando el control de las cárceles



Fanny Hernández Correa (59) llevaba 27 años trabajando en el INPE. Fue asesinada el pasado 11 de septiembre de cinco balazos.

JULIO ROSPIGLIOSI

La orden salió de prisión. El asesinato de Fanny Hernández Correa (59), la funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) baleada cuando llegaba al trabajo, habría sido una represalia por filtrar a la prensa detalles sobre la crítica situación que se vive en el penal de Chinchipe: cobro de cupos y violentas agresiones a aquellos presos que no pagan. Abogada de profesión, hacía 27 años que Fanny Hernández trabajaba en este establecimiento.

Los colegas de la funcionaria del INPE aseguran que Chinchipe es sólo un ejemplo extremo de lo que viene sucediendo en las cárceles del país. Y advierten que los internos, a través de los "delegados", están tomando el control de las cárceles.

"Con esta gestión estamos viendo de manera más continua este tipo de situaciones. Dios no quiera que pase lo que pasó en Ecuador porque, créeme, esto ya se ha desbordado", advierte Julio César Burga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios.

Velorio de la abogada Fanny Hernández. La orden habría salido de la cárcel.



DESBORDE

La cárcel de Chinchipe tiene una población de más de 3,200 presos que son vigilados por 70 técnicos del INPE por turno, según explican fuentes sindicales. Para resolver la escasez de personal, esta institución ha dejado el control de los pabellones en manos de los presos.

"Lo que el INPE hace es que sus directores acuerden con los delegados para que estos controlen lo que pasa en los pabellones. Ellos son la autoridad. El agente sólo se va a encargar de que no se fuguen, pero lo que pasa dentro del pabellón lo controla el delegado",

dice Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE, otro de los sindicatos de la institución.

Los delegados, explica Llancari, suelen ser las personas más peligrosas del penal. También hay jerarquías y especialidades: a los delegados de pabellón les siguen los delegados de disciplina, de economía, de deportes, de celda y otros colaboradores.

Desde fines del año pasado familiares de los internos de Chinchipe contaban que, a través de terceras personas, algunos presos les cobraban por los colchones, comida y hasta para permitir las visitas en Na-

vidad. Las consecuencias de negarse a pagar las sufre el reo con agresiones de todo tipo, incluidas violaciones.

Los testimonios de las familias salieron primero en un programa online llamado "China Polo". Pero el escándalo reventó el pasado 3 de septiembre, cuando "Cuarto Poder" realizó un documentado reportaje.

Una de las víctimas entrevistadas por el dominical señaló que el interno Luis Antonio Peralta del Carpio (30) era uno de los que lideraba esta mafia.

Peralta es un ranqueado criminal. El 2016 fue presentado por la Policía como integrante de la banda "Los Injertos del Sur", dedi-



Luis Antonio Peralta del Carpio (30), principal sospechoso del atentado. Fue trasladado la madrugada del jueves de Chíncha a Challapalca (Tacna).



Jesús Rafael Petit Colina, alias "Chuy", el sicario venezolano que habría sido autor material del crimen, fue detenido el domingo pasado.



"Con esta gestión estamos viendo de manera más continua este tipo de situaciones. Dios no quiera que pase lo que pasó en Ecuador porque, créeme, esto ya se ha desbordado", advierte Julio César Burga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios.



"Lo que el INPE hace es que sus directores acuerden con los delegados para que estos controlen lo que pasa en los pabellones. Ellos son la autoridad", dice Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE, otro de los sindicatos.

cada al robo agravado y a la que se le achaca el asesinato de un agente de la Policía y de un cambista.

Actualmente Peralta es delegado del pabellón 5A y el principal sospechoso de encargar el asesinato de Fanny Hernández.

La mañana del 11 de septiembre Hernández fue emboscada cuando llegaba, a bordo de un colectivo, al penal. Según relató el chofer, el vehículo paró frente a una de las entradas del establecimiento y fue allí que el sicario los interceptó. El criminal se dirigió a Hernández, que iba en la parte posterior del auto, le pidió sus pertenencias y le disparó cinco veces. La abogada murió en el acto.

Una de las balas impactó en la pierna de Manuel Cervantes Cruz, otro trabajador del penal que viajaba junto a ella.

ECUADOR EN EL ESPEJO

Una de las tareas de Hernández era evaluar a los internos y emitir informes sobre los eventuales traslados a otros establecimientos. También estimaba posibles reducciones de penas. Un testimonio clave que ha recibido la Dirincri, sin embargo, apunta a que su muerte no está relacionada con esa función.

Un trabajador indicó a la Policía que una semana antes del atentado la psicóloga del penal le advirtió que él y la abogada Hernández estaban en la lista negra de Luis Antonio Peralta. "El motivo de las amenazas sería porque el interno había tomado conocimiento de que la occisa se encontraba en comunicaciones con programas televisivos como Cuarto Poder", se lee en un documento policial al que accedió este semanario.

Cuando el hecho se consumó, entre los trabajadores del INPE corrió un audio atribuido a un recluso apodado "Olluquito" que confirmaría la hipótesis. En esta grabación, el interno señalaba que Peralta había planeado el atentado junto a Antony Smith Ormeño Martínez (39), alias "Cheo", detenido el 2012 por robo agravado.

"Esta huevada está que

la arma ese weón de 'Cheo' con Peralta. Han hecho la fuerza. Y a la firme se van a tumbar a samputamadre. A esos les llega al pincho. Están forrados en plata, invierten 40, 50 lucas y les dan piso a toditos. Si ya le dieron piso a la abogada ya", se le oye decir a "Olluquito".

El delincuente también comentó que hay otros funcionarios en la mira, entre ellos César Bedón Ferrer, el nuevo director del penal, quien antes de asumir se desempeñaba como jefe de seguridad.

La tarde del domingo la División Policial de Chíncha detuvo a Jesús Rafael Petit Colina, alias "Chuy", un sicario venezolano, como el presunto gatillero del asesinato de la funcionaria. Se le imputa otro crimen por encargo relacionado a la construcción civil. Las fuentes policiales mantienen su declaración en reserva.

La madrugada del jueves 19, más de una semana después del crimen, los delincuentes Peralta y Ormeño fueron trasladados al penal de Challapalca, en Tacna.

Hace un mes una granada fue dejada en el frontis del penal de Lurigancho. Iba acompañada de un mensaje para el director: "Tiene una semana para regresar a su pabellón de origen a José Alexis Caycho Gómez o atentaremos a la visita". Caycho lideraba el pabellón 6 de este establecimiento.

Un mes después, cuando el INPE trasladaba a cinco presos de Lurigancho, entre ellos a Caycho, dos bombas artesanales explotaron en la puerta del penal. A pesar del atentado, los delincuentes fueron conducidos a otro penal.

Los criminales han seguido amedrentando a los funcionarios que están reclamando mejoras salariales y un bono por considerar que hacen una labor de riesgo.

El último 8 de septiembre el vehículo del alcaide del penal de Yurimaguas fue quemado a pocos metros del recinto penitenciario. "Fue una represalia por las requisas constantes que él estaba haciendo", afirma el dirigente Ángel Llancari. ■

Hace medio año que el gobierno de Dina Boluarte estaba advertido de que se podía desatar una oleada de incendios en la sierra y selva del país. Se lo hizo saber el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que en abril pasado envió a la PCM un plan nacional para combatir los fuegos. La inquilina de Palacio lo engavetó. No quería incomodar a sus jefes del Congreso porque el plan chocaba con la ley antiforestal que acaban de aprobar los otorongos.

PLAN IGNORADO

El último plan contra incendios forestales fue elaborado en el 2018 y quedó sin efecto en el 2022. Al año siguiente Serfor envió a la PCM un nuevo plan para su aprobación. El despacho de Gustavo Adrianzen lo rechazó. Argumentaron que debía ser un plan multisectorial.

"Presentamos varias versiones, pero la PCM nunca le asignó la prioridad del caso. Volvimos a insistir a inicios de este año, pero nos respondieron que en su cronograma estaba previsto para ser discutido en noviembre. El plan contiene una hoja de ruta para guiar a los gobiernos regionales, gobiernos locales, Indeci, cuerpo de bomberos, etcétera. Preveía el caos que ahora estamos viendo. Lo que presencié es la constante falta de conexión de este gobierno con la realidad", dice Alberto Gonzales Zúñiga, exjefe de Serfor, expectorado del cargo por oponerse a la ley antiforestal salida del Congreso dominado por el hampa.

Durante la gestión de Gonzales se elaboraron tres versiones del "Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2024-2026". La última, enviada a la PCM en abril, alertó de incendios forestales que afectarían "gran parte del territorio nacional, incluyendo los que históricamente registran un menor número de alertas y áreas quemadas".

Expuso, además, algo aún más grave: el 99% de distritos con riesgo muy alto de incendios forestales a nivel nacional "no cuentan con ningún tipo de plan específico para la gestión del riesgo de incendios forestales en su territorio". La

La mandataria Dina Boluarte posando para la foto durante su visita a la región Amazonas el último 17 de septiembre. Su gobierno recibió el Plan Multisectorial ante incendios en abril de este año y decidió ignorarlo.

FOTO PRESIDENCIA



FOTO GORE UCAYALI

Incendio forestal en Yarinacocha (Ucayali). En esta región el Indeci informó sobre 12 incendios y 4 fallecidos. Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencias tiene registrados más de 90 incendios forestales en la zona.



Jugando con fuego

► El gobierno ignoró las advertencias sobre los previsibles incendios forestales y se sometió a la ley infame promovida por el actual presidente del Congreso

evaluación concluyó que 17 departamentos, 111 provincias y 458 distritos se encontraban en riesgo muy alto, y que la ausencia de un plan dejaba desprotegidas a más de medio millón de personas que viven y trabajan en las zonas vulnerables.

"Desde el Ejecutivo no le tomaron importancia porque el Congreso ya había impulsado sus propios cambios con la ley antiforestal", asegura Gonzales Zúñiga.

El pasado 23 de julio la Secretaría de Gestión de Riesgo de

Desastres de la PCM, a cargo de Percy Mercado Flores, convocó a una reunión a representantes del Sernanp, Serfor, Senamhi, Fuerzas Armadas y Bomberos para dialogar sobre los incendios forestales y "prevenir sus nocivas consecuencias". El en-

cuentro no sirvió más que para una foto en redes.

PAÍS EN LLAMAS

"Los incendios comenzaron en agosto, pero recién hace una semana todos entraron en pá-

nico. Ni el gobierno nacional ni los regionales o locales supieron qué hacer. Para apagar los incendios hemos formado grupos de pobladores voluntarios, brigadas voluntarias de guardias indígenas, pero no es suficiente", dice el apu David Ruiz, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez (Ucayali).

"Estamos en crisis, estos días todo amanece lleno de humo, no tenemos agua, se perdieron los cultivos, es terrible. Hay tres comunidades que lo han perdido prácticamente todo, son las comunidades de Puerto Firmeza, Cashibococha y Santa Teresita. En esas comunidades ubicadas en Yarinacocha (Ucayali) ya habíamos reforestado grandes extensiones que habían sido depredadas por taladores ilegales, pero ahora todo lo hemos perdido", asegura el líder indígena Robert Guimaraes.

El lunes 16 de septiembre la Mancomunidad Regional Amazónica, que integran los gobiernos regionales de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, solicitó que se declare en emergencia la Amazonía peruana.

Pero en Palacio no les temían a las llamas. "De momento no se ha considerado necesario", contestó el premier Gustavo Adrianzen al día siguiente. Horas más tarde la presidenta Dina Boluarte, frustrada porque el Congreso no le dio luz verde para viajar a Nueva York, dio un "mensaje a la nación" y declaró en emergencia a Amazonas, San Martín y Ucayali.

"La oportuna declaratoria del estado de emergencia era vital porque se tiene que destinar presupuestos especiales y ejecutarlos con rapidez para evitar que se siga agravando la situación", señala Magaly Ávila, especialista en gobernanza ambiental.

El último reporte situacional del Instituto Nacional de Defensa Civil, de ayer jueves 19 de septiembre, contabilizó 248 incendios forestales, 18 personas fallecidas, 150 heridos, 4,503 hectáreas entre cultivo perdido y afectado y 6,693 hectáreas entre cobertura natural perdida y afectada.

Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) advierten que Indeci está racaneando las cifras oficiales de hectáreas quemadas.

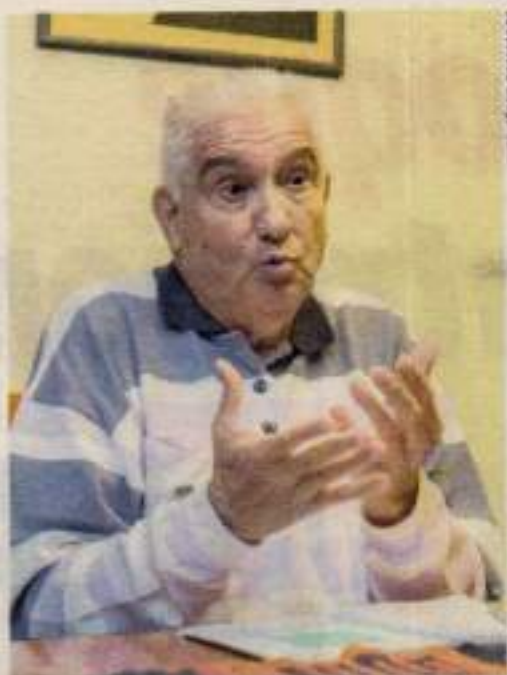


FOTO CÉSAR ZAMALLÓN

Alberto Gonzales Zuñiga, jefe del Serfor: "El plan contiene una hoja de ruta para guiar a los gobiernos regionales, gobiernos locales, Indeci, cuerpo de bomberos, etcétera. Previene el caos que ahora estamos viendo. Lo que presencio es la constante falta de conexión de este gobierno con la realidad".



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN

Elvira Gómez Rivera, exdirectora general de ordenamiento forestal del Serfor: "Cualquiera no puede apagar incendios, por eso la gente ha muerto asfixiada y con quemaduras. Todos estos factores se plantearon en el plan multisectorial, pero el Ejecutivo se hizo de la vista gorda".

Solo en Piura y Áncash registraron diez veces más incendios de los que fueron mostrados oficialmente por la defensa civil. En la región Amazonas un solo incendio en el distrito de Lamud se ha llevado por delante casi 10 mil hectáreas.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Incendios de la NASA, el escenario empezó a agravarse a finales de agosto y ya para la segunda semana de septiembre mostraba la Amazonía en llamas. Trece de las 18 muertes ocurrieron en septiembre. Y las predicciones de las próximas semanas no son favorables.

El último reporte meteorológico del Senamhi, del 17 de

septiembre del 2024, advierte que "se espera tener una dificultad de muy alta a extrema intensidad para controlar los incendios forestales en la selva, sierra y costa".

EL ORIGEN

Especialistas en materia ambiental explican que los incendios forestales son ocasionados fundamentalmente por malas prácticas agrícolas y factores climáticos adversos.

"Los agricultores suelen quemar para limpiar los terrenos y deshacerse de los rastrojos y desperdicios agrícolas. Las medianas y grandes empresas agropecuarias también están metidas. Ahora,



FOTO JOEL DUSÁN

Magaly Ávila, especialista en gobernanza ambiental: "Años anteriores no se había visto incendios tan extremos, pero lo que ocurrió fue por el debilitamiento de las políticas ambientales forestales. La ley antiforestal crea un incentivo perverso para ampliar la frontera agrícola".



FOTO JOEL DUSÁN

César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental: "Cuando ocurren estas quemaduras se pierde el 99% de la diversidad. Los científicos ya han advertido que nos estamos acercando a un nivel de no retorno de la destrucción de la Amazonía".

con el cambio climático, ya se preveían sequías más prolongadas. Entonces, cuando se inicia una quema, se descontrola porque no hay agua, porque los vientos son fuertes y la temperatura elevada. A esto le sumas el incentivo a la quema que vino con una ley que fue publicada sin ninguna consulta", explica Elvira Gómez Rivera, ingeniera forestal especialista en bosques y exdirectora general de ordenamiento forestal del Serfor.

Gómez forma parte del grupo de funcionarios que fueron retirados del Serfor por oponerse a la ley antiforestal del congresista Eduardo Salhuana, promulgada en diciembre del 2023.

"Años anteriores no se habían visto incendios tan extremos, pero lo que ocurrió fue a causa del debilitamiento de las políticas ambientales forestales. La ley antiforestal crea un incentivo perverso para ampliar la frontera agrícola, tanto en la zona andina como en la zona amazónica, porque elimina la prohibición de cambio de uso de tierras con aptitud forestal. Esta ley trajo abajo el procedimiento de clasificación de tierras", señala Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética.

"Lo que hizo la ley fue hacer borrón y cuenta nueva. Te dice: si cometiste algún delito ambiental y destruyes, quedará en la impunidad porque no hay sanción para quienes deforestaron. Cuando ocurren estas quemaduras se pierde el 99% de diversidad que hay en estas zonas, los científicos ya han advertido que nos estamos acercando a un nivel de no retorno de la destrucción de la Amazonía. El tema no lo está abordando el Estado", advierte César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental.

La experta Magaly Ávila añade que las actividades económicas ilegales también favorecen la propagación de los incendios. "La minería y tala ilegal que forman parte de los delitos ambientales también constituyen un foco de deforestación enorme. Al no haber cobertura vegetal en estas zonas es más fácil que los incendios avancen", detalla Ávila.

"El clima no se puede controlar, pero sí la actividad humana. En otros países se hacen quemaduras controladas que son supervisadas por especialistas que calculan la dirección del viento, la humedad, la temperatura y otras condiciones climáticas. Aquí no ocurre eso porque no hay asistencia, tampoco se preocupan por los bomberos que están capacitados para incendios estructurales mas no forestales. Hay bomberos especializados en las áreas protegidas, pero no se dan abasto. Cualquiera no puede apagar incendios, por eso la gente ha muerto asfixiada y quemada. (...) El Ejecutivo se hizo de la vista gorda, ellos saben de las políticas perversas que crearon y exacerbaban esta situación. Tienen rabo de paja", concluye la especialista Elvira Gómez. ■

de manejar un supuesto sindicato de construcción civil y en alianza con integrantes de otros sindicatos cobran cupos extorsivos por cuidar obras. Otra forma en la que cobran cupos es poniendo a trabajadores fantasmas y les cobran porcentajes de lo que ganan (...). Ellos se dedican a usurpaciones bajo la modalidad de invasiones. También al tráfico de terrenos, al marcaje y reglaje de víctimas, a robar a personas naturales, empresas y vehículos para luego extorsionar a los dueños", relató un testigo a la Policía.

"(...) Pegan stickers en las puertas de los negocios a los que cobran cupos. También colocan una letra 'Z' con dos dibujos de armas largas (...) Ellos asesinan a los que se oponen o que no están de acuerdo con su forma de trabajo", narró un testigo que describió cómo es que ejercen control de "su territorio".

Tras un año de investigaciones pisándoles los talones a los miembros de la banda, la Fiscalía solicitó la detención preliminar de 41 sospechosos, incluyendo a su presunto cabecilla, Zorovabel Del Castillo. El Ministerio Público también pidió el allanamiento de 51 inmuebles, ubicados en Huaura, Huacho, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y San Juan de

Miraflores.

El 15 de agosto, sólo seis días después de aprobarse la mentada ley en el Parlamento, se ejecutó el operativo para desbaratar a la banda "Los Zeta de Sayán". Varios de los allanamientos se frustraron.

"La Defensoría Pública del Ministerio de Justicia nos dijo que no iban a poder presentarse porque no tenían suficiente personal y que había lugares a los que no podían llegar porque estaban muy lejos", dice el fiscal Chávez Cotrina.

En total, en el operativo participaron 800 agentes de la Policía y 62 fiscales. Si bien todos los integrantes de la banda fueron detenidos, la Fiscalía tuvo que esperar más de dos horas para poder allanar sus viviendas. Y no todos los inmuebles pudieron ser escrutados. La Fiscalía de Crimen Organizado desconoce si durante esas dos horas de espera los familiares de los detenidos se deshicieron de evidencias.

"En ningún país del mundo, ni en Europa, menos en Estados Unidos, existe norma que establezca que para hacer un allanamiento debe estar presente el abogado (...) El Ejecutivo y el Legislativo están en una competencia para ver quién da más normas a favor del crimen organizado", dice el fiscal Chávez Cotrina. ■

Bloque patrimonial

FOTO CÉSAR ZAMALLOA

► La fiscal Naomi Tamayo, del Eficcop, ya tiene armado el caso de la congresista Elizabeth Medina, su esposo y uno de sus asesores. La operación consistía en conseguir dinero público para una obra y obtener un porcentaje de la inversión a cambio

BRUNO AMORETTI

El rompecabezas está completo. Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), su esposo y su asesor principal montaron —presuntamente— una red criminal que canjeaba presupuesto para obras a cambio de coimas.

El golpe final se ejecutó el miércoles 11 de septiembre de madrugada. Un equipo conjunto de fiscales y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanó 16 viviendas en Lima y Huánuco. Entre la lista había dos propiedades de la congresista Elizabeth Medina.

Los hechos que involucran a la parlamentaria se remontan a fines del 2021. Todos los años, en la ley de presupuesto, los parlamentarios incluyen el conocido "anexo 5", un presupuesto adicional para financiar obras a dedo en las regiones. El millonario presupuesto trajo consigo la modalidad "obras por coimas".

El caso de la parlamentaria Medina es una muestra



Elizabeth Medina, congresista del Bloque Magisterial. Empezó como una modesta profesora.

de ese cabildeo congresal. La fiscal Naomi Tamayo, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), ha identificado que Medina utilizó su curul para que una obra de pistas y veredas, presupuestada en S/ 7 millones en el distrito de Molino (Huánuco), fuera incluida en la codiciada lista del "anexo 5".

La Fiscalía recogió la declaración de un colaborador eficaz que narró con detalles el *modus operandi* de la

organización criminal "Los Mochaobras de Huánuco".

Un personaje clave en la trama es Víctor Morales Chocano, esposo de la congresista Medina, que habría sido el "operador encargado de captar alcaldes para la ejecución del proyecto criminal".

En octubre del 2021, un mes antes de aprobarse la ley de presupuesto, Julio Lorenzo Obregón, un amigo del matrimonio Medina-Morales, se reunió con Kevin Sumarán Lino, exalcalde de

Pendograma solución anterior N°700





Victor Morales Chocano, esposo de Elizabeth Medina. Está prófugo de la justicia gracias a la nueva ley que favorece al crimen organizado.



Kevin Sumarán Lino, exalcalde del distrito Molinos (Huánuco). La Fiscalía le imputa haber recibido S/ 190 mil de la tajada que se repartió la organización criminal "Los Mochabros de Huánuco".



Walter Chunga Palacios, asesor de la bancada del Bloque Magisterial y hasta agosto asesor principal de Elizabeth Medina.

mañana, pero en algunos casos los policías no pudieron ingresar hasta pasadas las 8 de la mañana. Esto se debió a la nueva ley que favorece al crimen organizado. La norma exige la presencia del abogado del investigado antes del allanamiento.

¿El resultado? De las nueve personas con orden de prisión preventiva, dos se dieron a la fuga. Entre ellas está Victor Morales Chocano, esposo de Elizabeth Medina. La congresista fue una de las que votó a favor de la ley que dificulta los allanamientos.

traría el rol de Chunga en la presunta red criminal. Los interlocutores serían Victor Morales, esposo de Medina, y Kevin Sumarán, exalcalde de Molino. En el chat del 8 de abril del 2022, Morales le envía a Sumarán el número de Walter Chunga y le escribe:

-Te paras frente al Congreso y de ahí le llamas.

-Está bien. En 15 minutos debo estar ahí -responde Sumarán.

-Ok -dice Victor Morales.

-Ya me comunicué. Lo estoy esperando -afirma Kevin Sumarán.



La Toyota Hilux último modelo que la congresista Elizabeth Medina compró al contado por USD 39,100 el 28 de febrero del 2022. Días antes su esposo había terminado de cobrar los S/ 272 mil en coimas.

la localidad de Molino. En la cita, Lorenzo le ofreció a Sumarán financiar, con coima de por medio, los proyectos de inversión que su gestión no había podido ejecutar.

"El (Lorenzo) trabaja con el esposo de la indicada congresista, que es un expolicía, y por medio de la congresista se podía conseguir presupuesto para las obras, esto es incorporar a la Ley de Presupuesto, pero que la modalidad es con un pago de una comisión del seis por ciento del costo directo del proyecto", narró un colaborador eficaz en julio del 2023.

Cuando Elizabeth Medina cumplió con su parte del acuerdo, empezaron las entregas de dinero. Entre diciembre del 2021 y febrero del 2022 el esposo de la congresista cobró S/ 272 mil en efectivo por la "gestión". Días después, el 28 de febrero, Eli-

zabeth Medina y su cónyuge adquirieron una camioneta marca Hilux al cash por un valor de 39,000 dólares.

El exalcalde Sumarán también recibió S/ 190,000 en efectivo. La coima la habrían pagado las empresas Consorcio Vial Molino e Iso Const & Proyect. El representante de una de las compañías es familiar de Sumarán.

Los fiscales del Eficcop apuntan que funcionarios de rango medio en el Ministerio de Vivienda, aún no identificados, pasaban por un tubo los expedientes de obras que anteriormente habían sido declaradas no aptas. Ese es el caso del proyecto de los S/ 7 millones de Medina.

La Fiscalía pediría entre 29 y 35 años de cárcel de prisión para los investigados.

Todos los sospechosos detenidos en Huánuco fueron trasladados a la Prefectura de

Lima, donde cumplen prisión preliminar por 10 días. La Fiscalía pedirá 36 meses de prisión preventiva.

"La congresista de la República Elizabeth Sara Medina Hermosilla habría logrado a través de actos de tráfico de influencias, la priorización del proyecto de obra (...) y justamente ello lo habría logrado aprovechando su función de congresista de la República y coordinando con altos funcionarios", se lee en el expediente fiscal.

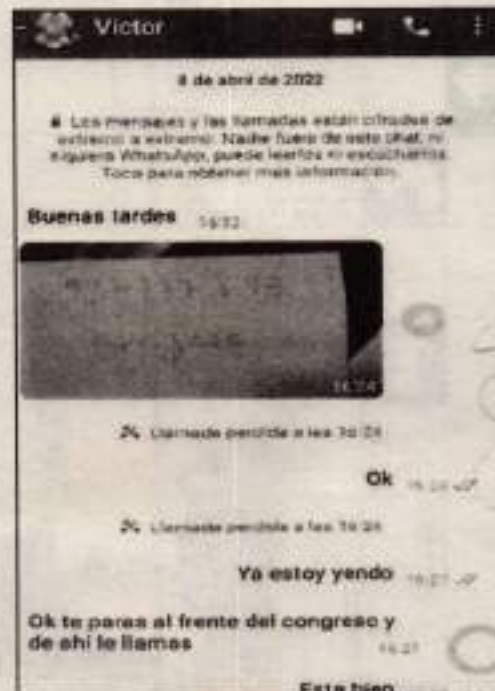
Medina, por prerrogativa congresal, será investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Cuando los agentes de la Diviac pusieron en marcha el allanamiento contra los investigados, se toparon con varias trabas. El operativo empezó a las 3:30 de la

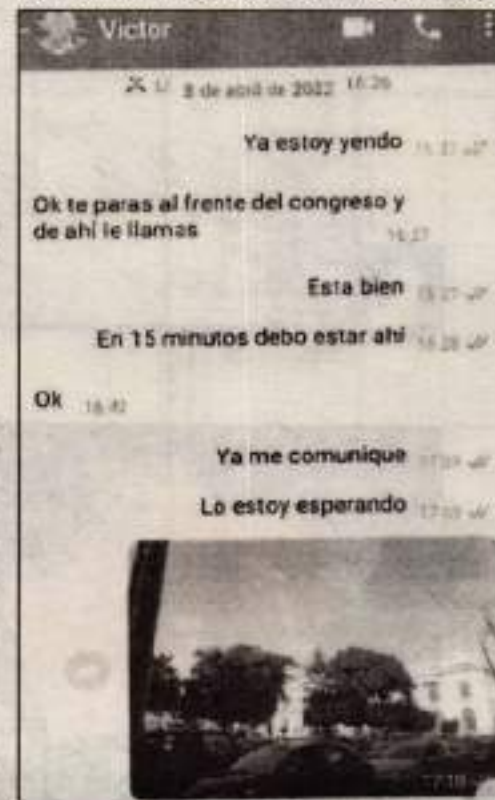
Otro personaje clave en esta trama es Walter Chunga Palacios, asesor de la bancada del Bloque Magisterial y hasta agosto pasado asesor principal de Medina.

Según el expediente fiscal del Eficcop, Chunga brindaba apoyo a la congresista Medina para captar a representantes de gobiernos locales a cambio de coimas. "Los coordinadores organizadores, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, con apoyo de su asesor Walter Fidel Chunga Palacios, se habrían reunido con diversas personas a fin de constituir una organización criminal, donde concertaron, instrumentalizando su poder, por el cargo que ostentan, para captar a representantes de gobiernos locales", señala la Fiscalía.

La fiscal Naomi Tamayo accedió a una conversación de WhatsApp que demos-



Dos chats del 8 de abril del 2022 entre Victor Morales Chocano, esposo de la congresista Elizabeth Medina, y Kevin Sumarán Lino, exalcalde de Molino (Huánuco).



Para entonces, el alcalde Kevin Sumarán ya había cumplido con su parte del trato: el pago de la coima a la congresista y su esposo.

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desafío insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: REBECA DIZ RE

LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHAN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DÍZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARIA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** VALERIA VICENTE **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NUÑEZ CARVALLO, RODOLFO
 SANCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208-C, 402 MIRAFLORES.
TELÉF.: (01) 693-1082 **CONTACTOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com - presna@hildebrandtensustrece.com - www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece -
TWITTER: @D116931082 **IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA - HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA SEPTIEMBRE 2024**